



Andrés Bermúdez Liévano / Juan Carlos Garzón



El catálogo de las pequeñas soluciones
ALTERNATIVAS PARA SUSTITUIR LOS CULTIVOS DE COCA EN COLOMBIA



FIP
FUNDACIÓN IDEAS PARA LA PAZ

**FRIEDRICH
EBERT
STIFTUNG**
FESCOL

El catálogo de las pequeñas soluciones

ALTERNATIVAS PARA SUSTITUIR LOS CULTIVOS DE COCA EN COLOMBIA

El catálogo de las pequeñas soluciones

ALTERNATIVAS PARA SUSTITUIR LOS CULTIVOS DE COCA EN COLOMBIA



El catálogo de las pequeñas soluciones

AUTORES

Andrés Bermúdez Liévano y Juan Carlos Garzón Vergara

EDICIÓN Y CORRECCIÓN DE ESTILO

Elizabeth Reyes Le Paliscot

FOTOGRAFÍAS

Andrés Bermúdez Liévano

FUNDACIÓN IDEAS PARA LA PAZ

Calle 100 n° 8A-37, torre A, oficinas 305, Bogotá

Teléfono 57 (1) 747 02 73

www.ideaspaz.org

Correo electrónico: fip@ideaspaz.org

FRIEDRICH-EBERT-STIFTUNG EN COLOMBIA (FESCOL)

Calle 71 n° 11-90, Bogotá

Teléfono 57 (1) 347 30 77

www.fes-colombia.org

Correo electrónico: fescol@fescol.org.co

PRIMERA EDICIÓN

Bogotá, mayo de 2020

ISBN 978-958-8677-38-5

DISEÑO Y DIAGRAMACIÓN

Ángela Lucía Vargas

IMPRESO EN EDITORA GÉMINIS S. A. S.

Las experiencias publicadas en este libro forman parte del *Proyecto Coca*, un proyecto periodístico del medio digital *Pacifista*, y fueron publicadas entre 2017 y 2019.

El uso comercial de esta publicación está prohibido sin previa autorización escrita de la Friedrich-Ebert-Stiftung (FES). Esta publicación fue realizada sin ánimo de lucro y circula de manera gratuita.

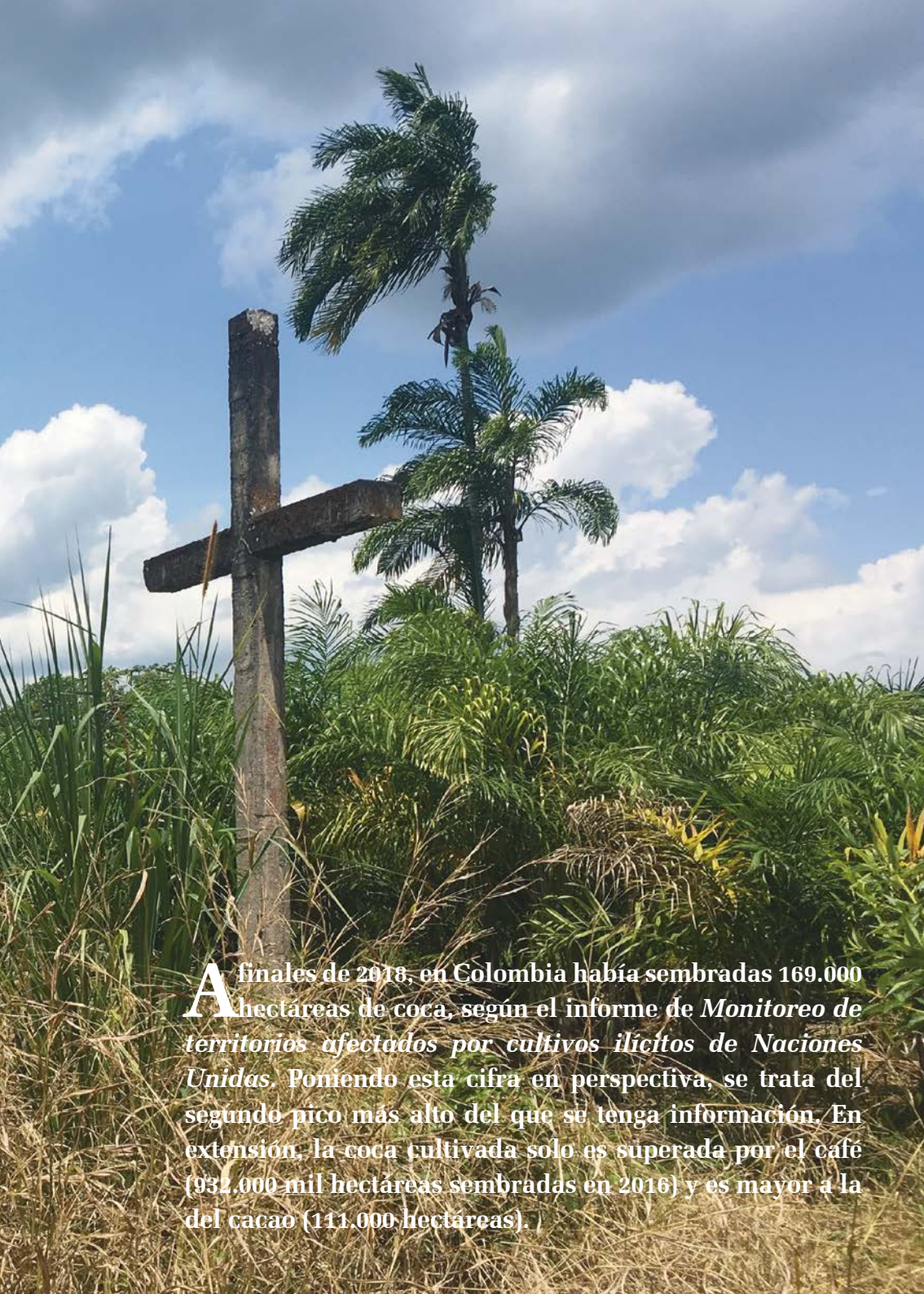
Contenido

1	Para un “gran” problema, pequeñas soluciones	9
2	Las desviaciones positivas y las secuencias invertidas	19
3	El catálogo de las pequeñas soluciones	29
1	Identities culturales recuperadas	31
2	Agrónomos locales	39
3	Empresas comunitarias	45
4	Mercados verdes	55
5	Comprador asegurado	63
6	Alianzas empresariales	73
7	Ciencia campesina	79
8	Acuerdos de conservación para cerrar la frontera agropecuaria	87
9	Campesinos como guías turísticos	97
10	Cadena comercial con la ciudad	105
4	Un pequeño empujón	113
	Bibliografía	121
	Autores	127

1

**Para un “gran” problema,
pequeñas soluciones**





A finales de 2018, en Colombia había sembradas 169.000 hectáreas de coca, según el informe de *Monitoreo de territorios afectados por cultivos ilícitos de Naciones Unidas*. Poniendo esta cifra en perspectiva, se trata del segundo pico más alto del que se tenga información. En extensión, la coca cultivada solo es superada por el café (932.000 mil hectáreas sembradas en 2016) y es mayor a la del cacao (111.000 hectáreas).

Los indígenas inga de Nariño son una de muchas comunidades en Colombia que sustituyeron cultivos de uso ilícito por voluntad propia.



De la siembra de coca dependen miles de familias. Solo en el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), que arrancó tras la firma del Acuerdo de Paz con las Farc, se encuentran vinculadas unas 99.000 familias. De éstas, el 67% han sido cultivadoras de coca y otro 15% recolectoras de su hoja.

A primera vista el problema de los cultivos ilícitos parece abrumador, difícil de resolver.

El Estado colombiano ha hecho uso de tres herramientas para intentar disminuirlos. En primer lugar, están la erradicación forzada y la aspersión aérea con glifosato, que buscan reducir las hectáreas de estos cultivos e impactar el potencial de producción de hoja de coca. En el corto plazo, las dos muestran resultados; sin embargo, en el mediano y largo plazo, por sí solos suelen ser insostenibles ya que, si bien producen una reducción, no logran revertir los factores que han permitido que surjan y se mantengan los cultivos ilícitos. De otro lado, se encuentra la sustitución voluntaria o concertada con las comunidades, que toma tiempo y demanda recursos, pero que —bien hecha— logra generar condiciones para un tránsito a la economía legal que sea sostenible.

La decisión sobre qué tipo de herramienta se debería usar está en una constante tensión entre mostrar resultados inmediatos —enfocados en reducir la oferta— o apostar por soluciones de largo plazo, lo cual implica necesariamente no solo pensar en los cultivos ilícitos, sino en las poblaciones que dependen de ellos. Aun aceptando que la erradicación

forzada y las fumigaciones pueden conseguir una reducción significativa, queda abierta la pregunta sobre cómo evitar la resiembra y el desplazamiento de estos cultivos hacia otras regiones. Este es uno de los dilemas que no ha podido resolver el Estado colombiano.

Hasta ahora, la opción ha sido a buscar una “bala de plata” —una gran solución— que logre cambiar radicalmente el problema. Sin embargo, el desafío es complejo y difícilmente se arreglará con el uso de una sola herramienta.

Tomemos el caso de la aspersión aérea, a la que varios atribuyen la reducción de los cultivos de coca entre 2007 y 2012, cuando Colombia pasó de tener unas 99.000 hectáreas a poco menos de 48.000, luego de asperjar casi 700.000 hectáreas con un herbicida a base de glifosato. Bajo las condiciones actuales y tomando en cuenta los condicionamientos fijados por la Corte Constitucional, en el mejor de los escenarios la fumigación podría usarse en una tercera parte de las zonas donde hay coca. Para las otras dos terceras partes aún habría que responder cuál es la estrategia más idónea.

Las críticas a la aspersión se dirigen a su baja eficiencia y a las consecuencias negativas para el ambiente y la salud pública de las poblaciones. En cuanto a la erradicación manual, el alto número de personas muertas y heridas en operaciones por causa de minas antipersonal pone en entredicho su viabilidad. Mientras tanto, el Desarrollo Alternativo, cuya cara más reciente es el PNIS, enfrenta cuestionamientos ligados a la generación de incentivos

perversos —por la entrega de beneficios por parte del Estado a los cultivos de coca— y a su poca capacidad para contribuir al tránsito a la economía legal.

Visto en su conjunto, el desafío de los cultivos ilícitos parece un problema sin salida. Pero es posible que el verdadero problema sea la manera como entendemos este desafío, lo cual se refleja en dos posiciones extremas. Por una parte, hay quienes fijan su atención casi que únicamente en la existencia de los cultivos ilícitos, sin considerar el contexto y las condiciones de vulnerabilidad de las poblaciones que dependen de esta actividad. Por la otra, hay quienes argumentan que mientras no haya bienes públicos y se transformen las condiciones en los territorios, los cultivos continuarán existiendo.

Caemos entonces en un falso dilema que suele llevar al inmovilismo: el desafío es tan grande que cualquier cosa que se haga parece insuficiente.

Sin embargo, al observar con detenimiento, en realidad lo que denominamos “el problema de los cultivos ilícitos” es un conjunto de problemas concretos que, identificados y entendidos apropiadamente, pueden ser resueltos, uno a la vez¹.

1 Tomamos aquí la propuesta para analizar el problema de la pobreza hecha por los Premios Nobel de Economía, Abhijit Banerjee y Esther Duflo, en *Poor Economics: A radical rethinking of the way to fight global poverty* (Nueva York: Public Affairs, 2011).

Desafortunadamente, las discusiones no se suelen dirigir a responder cuestiones específicas como qué bienes públicos se requieren para hacer viables las economías locales, cómo integrar a poblaciones que están aisladas de los circuitos del mercado legal, qué capacidades hay en estas zonas que podrían ser usadas para hacer el tránsito a actividades legales o cuál es la demanda que podrían satisfacer los proyectos productivos. A eso se suman preguntas igualmente importantes sobre el desafío de seguridad de las zonas donde se concentran los cultivos ilícitos y cómo proteger a sus habitantes.

Lo sorprendente es que, en medio de los bandazos en la política de drogas y el inconstante acompañamiento del Estado, cientos de comunidades en todo el país han intentado salir de economías ilícitas como la coca y la amapola durante las últimas dos décadas.

No lo han hecho siguiendo una ruta secuencial y rígida trazada por el gobierno central. Se trata más bien de esfuerzos colectivos que han buscado resolver problemas estructurales a partir de la experiencia propia y los conocimientos prácticos, con un acompañamiento esporádico de actores e instituciones. Más allá de la valoración sobre si han sido historias de éxito, estos procesos liderados por organizaciones campesinas, empresas rurales y comunidades étnicas arrojan un cúmulo de lecciones valiosas.

Esta es justamente la invitación del catálogo que tiene en sus manos, que pretende pasar de la discusión sobre la “gran estrategia” perfectamente dise-

ñada para hacerle frente a todo el fenómeno de los cultivos ilícitos, a una sobre soluciones concretas a problemas específicos, construidas desde lo local y descubiertas a punta de ensayo y error.

Suscribimos en este sentido lo que el economista Albert O. Hirschman denominó el “posibilismo”: la idea de que las innovaciones dispares, que pueden parecer desordenadas y que se dan en pequeña escala, revelan posibilidades y cambios que podrían ser viables². De ahí que abordemos esta discusión desde el conocimiento imperfecto sobre lo que es y lo que podría ser. En otras palabras, desde la incertidumbre.

La base de esta reflexión son diez experiencias locales, reporteadas en terreno y narradas principalmente en el marco del *Proyecto Coca* del medio digital *Pacifista*, que nos permiten identificar acciones que podrían contribuir a responder al problema de los cultivos ilícitos³. A partir de la revisión de estos casos, analizamos los principales desafíos que enfrentaron, así como las ideas y acciones que contribuyeron a su relativo éxito. Este insumo permite

2 | Hirschman, A. “Political Economics and Possibilism” (1971). En *The Essential Hirschman*. Jeremy Adelman, editor. Princeton: Princeton University Press, 2013, p. 1-34.

3 | El *Proyecto Coca* fue un proyecto periodístico del medio digital *Pacifista* que documentó en terreno la realidad de los campesinos en proceso de buscar alternativas de vida distintas a la coca y que entre 2017 y 2019 publicó más de 60 reportajes sobre política de drogas, sustitución de coca y desarrollo local.

abordar la discusión sobre cuáles alternativas de política pública se pueden desarrollar desde el nivel local y con la participación de las comunidades.

El lector encontrará que las historias documentadas desde la óptica del “periodismo de soluciones” (*solutions journalism* en inglés), que centra su atención no solo en los problemas, evidencian las complejidades del proceso lento y gradual que supone sustituir cultivos como la coca o la amapola para luego encontrar otras alternativas que, a mediano y largo de plazo, permitan a sus dueños construir proyectos de vida viables y sostenibles.

No son recetas mágicas ni balas de plata infalibles. Pero pueden dar pistas valiosas a los funcionarios estatales, las agencias de cooperación y las propias comunidades, sobre qué factores contribuirían a resolver, de una vez por todas, el problema de los cultivos de uso ilícito en Colombia.

**Las desviaciones positivas
y las secuencias invertidas**

Entrada a una parcela el resguardo nasa de Toribío,
que ha avanzado mucho en sustituir la coca por gulupa.

BIE
A lo
El e
PRO
JOSE



Bienvenidos
a la finca
de Pucallpa
Perú
Alberto

De manera persistente, la discusión sobre las alternativas para responder a los cultivos ilícitos suele ser muy general y enfocada en lo que no funciona. La gran mayoría de las intervenciones carecen de evaluaciones y son pocos los casos de “éxito” que se suelen citar. Los análisis se han centrado en entender el aumento de los cultivos ilícitos y su concentración en determinados territorios, mientras que poco sabemos sobre aquellas zonas que en algún momento tuvieron plantaciones de coca y han logrado reducirlas sustancialmente.



Las estrategias de muchas comunidades para salir de la coca y la amapola con frecuencia han venido acompañadas por soluciones complementarias como crear una guardia indígena, que podrían parecer desconectadas pero cumplen un papel en que esa transición a la legalidad sea efectiva y duradera.

En esos municipios y veredas con coca, hay familias y comunidades que derivan su sustento de actividades legales o que prefirieron abandonar dichos cultivos. Estos casos son justamente las *desviaciones positivas*: los “casos atípicos” (o *outliers*) que no han seguido el mismo curso de acción y han optado por permanecer en la legalidad o transitar hacia ella, muchas veces a contracorriente⁴. Estas experiencias se contraponen a la manida expresión: “Hemos tratado todo y no funciona nada”.

El enfoque de “desviación positiva” ganó relevancia a principios de la década de los noventa, luego de que la organización *Save the Children* lo comenzó a usar para identificar soluciones a la desnutrición infantil en las aldeas rurales de Vietnam. Decidieron observar las familias que no tenían desnutrición y encontraron que los niños eran alimentados de manera diferente. Tomando como base esta experiencia, ayudaron a los demás miembros de la comunidad a adoptar la misma dieta, lo cual contribuyó a responder al problema con una solución que estaba siendo aplicada por sus pares⁵.

La “desviación positiva” parte de que en cada comunidad hay ciertos individuos o grupos cuyos comportamientos y estrategias “inusuales” les per-

4 Pascale, R., Sternin, J. & Sterning M. *The power of positive deviance: How unlikely innovators solve the world's toughest problems* (2010).

5 Karlan, D. “Survival of the Deviant” (2010). En *Stanford Social Innovation Review*. Disponible en: https://ssir.org/book_reviews/entry/power_positive_deviance_richard_pascale_jerry_sternin_monique_sternin

miten encontrar mejores soluciones que sus pares. El denominador común es que en estos casos: se encontraron soluciones a problemas aparentemente insolubles, las opciones fueron descubiertas por miembros de la misma comunidad y los “innovadores” tuvieron éxito, aunque compartían las mismas restricciones y barreras que los demás miembros de la comunidad⁶.

Un elemento clave de las “desviaciones positivas” es que se dirigen a problemas concretos identificados por las comunidades. En lugar de abordar la totalidad del problema, deciden dividirlo en pequeños desafíos para los que es más fácil encontrar soluciones. Además, implementan una serie de pasos para resolver cada uno de esos problemas. Esto significa que las reformas son incrementales y surgen con la implementación de acciones específicas, a través de las cuales las comunidades aprenden qué funciona y por qué funciona⁷.

Las discusiones alrededor del desarrollo alternativo reconocen el papel protagónico que tienen las comunidades y los actores locales. Sin embargo, en la práctica, las instituciones y operadores suelen estandarizar los procesos, sin reconocer el entorno altamente diverso de las zonas que tienen cultivos ilícitos, las necesidades locales específicas o las capacidades de los actores en el territorio. Un asunto problemático es que las intervenciones no se adap-

6 Pascale, R. et al.

7 Andrews, M., Pritchett, L. & Woolcock, M. *Building State Capability*. Oxford: Oxford University Press, 2013.

tan al potencial de desarrollo local y que, cuando lo hacen, en muchas ocasiones no logran conectar con el mercado y la demanda.

Con frecuencia, los planes para sustituir los cultivos ilícitos y generar las condiciones para que las familias transiten a economías legales, subestiman los factores que son indispensables para que los proyectos sean exitosos, lo que en economía del comportamiento se denomina un “sesgo optimista”.

Por ejemplo, en sus inicios, la Hoja de Ruta definida por el PNIS estipulaba que en dos años las familias contarían con un proyecto productivo de largo plazo. Sin embargo, en la práctica, la evidencia sugiere que al programa le podría tomar al menos cuatro años para cumplir este objetivo. El seguimiento al PNIS realizado por la Fundación Ideas para la Paz (FIP) mostró, por ejemplo, que la asistencia técnica para el campesino que sustituía coca, programada para el segundo mes del programa, llegó en promedio con cinco meses de retraso. A su vez, los proyectos de cultivos de ciclo corto, pensados para ayudar a las familias a sostenerse mientras sus apuestas de largo plazo arrancaban a producir, tardaron hasta 16 meses.

En este contexto de brechas entre lo que se planea y lo que finalmente se implementa, surgen iniciativas colectivas que —como afirmó Hirschman— “invierten las secuencias”⁸. Es decir, siguen un curso

de acción no advertido, que termina generando una “nueva” ruta para el desarrollo local. La creatividad aparece como un recurso que no estaba contemplado pero que permite, incluso, hacer frente a problemas estructurales. En estos casos, los planes rígidos y basados en lecturas simplificadoras se ven superados por el dinamismo de las personas y su capacidad para identificar alternativas concretas.

Reconocer el valor de estas experiencias nos debería llevar a pensar en intervenciones dotadas de flexibilidad y la posibilidad de iterar, es decir, avanzar a partir del ensayo y el error.

Es importante mencionar que este catálogo pretende propiciar una conversación sobre soluciones y cursos de acción tomando como base una serie de experiencias concretas, que fueron narradas y reporteadas como parte de un ejercicio periodístico. Por este motivo, no se debe leer como el análisis de casos estructurados a partir de una metodología preestablecida. De hecho, la conexión entre las “desviaciones positivas” y el “periodismo de soluciones” es el resultado de las conversaciones entre los autores y la firme convicción de buscar, identificar y documentar alternativas posibles en lo local.

Para realizar este catálogo tomamos diez experiencias que tienen en común la identificación de problemas específicos por parte de las comunidades y los actores locales, así como el desarrollo de pequeñas soluciones. Aunque es muy pronto para concluir que son ejemplos exitosos, sí representan “desviaciones positivas” pues emergen en un contexto y una coyuntura donde las estrategias de desarrollo alternativo no han dado los resultados esperados.

A partir de estas experiencias, identificamos las siguientes dimensiones y estrategias, que agrupan las alternativas que idearon los protagonistas de estas historias. Nuestra propuesta para el lector es que use este esquema para navegar a través de las narraciones y arme su propio rompecabezas.

No pretendemos señalar una ruta específica o una secuencia, sino ilustrar cómo en la práctica las comunidades y los actores locales encuentran diversas opciones para salir de los cultivos ilícitos. Para esto, acompañamos las narraciones con datos y contexto, de tal manera que se conecte la experiencia local con la dimensión nacional.

ESTRATEGIAS				
DIMENSIONES	Estudios de oferta y demanda de productos	Relación directa con compradores (sin intermediarios)	Registros de marca	Apertura de canales de venta directa a consumidores urbanos
Políticas con enfoque local	Asistencia técnica hecha a la medida	Sistemas de transporte comunal efectivos	Transferencia de ciencia y tecnología	
Rol comunitario y familiar	Fortalecimiento de capacidades y mano de obra local	Fortalecimiento organizacional y rescate de procesos culturales	Rol de la segunda generación en familias excultivadoras	Espacios de concertación y priorización comunitaria de iniciativas de desarrollo alternativo
Coordinación entre actores locales y no locales	Figuras de asociatividad como las APC (asociaciones público-comunitarias)	Alianzas con privados que manejan distintas fases de producción	Alianzas con universidades y científicos	
Simbiosis entre agenda productiva local y desarrollo sostenible	Identificación de mercados verdes		Acuerdos de conservación para cerrar la frontera agropecuaria	
Usos alternativos de la tierra y del cultivo	Iniciativas productivas no agropecuarias, como servicios turísticos	Aprovechamiento de toda la materia prima que sale del producto	Diversificación para reducir dependencia de un único producto	Cultivos de ciclo corto para subsistencia y transición a cultivos de ciclo largo

3

**El catálogo
de las pequeñas soluciones**

Los ingas de Tablón de Gómez estructuraron la sustitución de la amapola por el café en torno al rescate de una identidad cultural indígena que habían ido dejando de lado.





1

Identidades culturales recuperadas

Liliana Armero soltó su tambor, tomó una bandera blanquinegra y, con un cántico, salió de la casa en el filo de la montaña donde llevaba varias horas bailando. Al son de su señal, cientos de indígenas inga comenzaron una frenética y festiva marcha por la polvorienta carretera que serpentea las montañas del norte de Nariño.

En el atun puncha, los inga se piden perdón pero también le piden perdón a la tierra por el daño ambiental que le hicieron años atrás con la amapola.



Ondeando banderas, bamboleando las tiras rojas de sus tocados emplumados y tomando sorbos de guarapo, los inga abrieron dos días de celebraciones cuyo fin es pedirse perdón entre sí. Solo que, desde hace 14 años, cuando resucitaron una ceremonia religiosa que habían perdido casi del todo, también le piden perdón a la tierra que habitan por el daño que le han hecho.

Este carnaval —que ellos llaman el *atun pucha*— es el símbolo de un proceso extraordinario de transformación: de la mano de un laborioso esfuerzo por recuperar sus tradiciones y su espiritualidad, los indígenas del resguardo de Aponte, en el municipio del Tablón de Gómez, en Nariño, han venido sanando las heridas físicas y emocionales que les dejaron dos décadas de cultivo de amapola y de convivencia forzada con tres grupos armados ilegales.

Ese proceso de rescate cultural, con el que cambiaron dos mil hectáreas de amapola por café especial entre 2003 y 2004, podría ser uno de los modelos más exitosos de replicar en el centenar de resguardos indígenas cuyos territorios están invadidos por coca y amapola.

Los ingas, el único pueblo indígena en Colombia que es heredero del vasto imperio incaico, decidieron recuperar su identidad. Y el primer paso consistió en elaborar su ‘plan de vida’, una suerte de hoja de ruta y de Constitución para la comunidad. El segundo fue erradicar, en mingas de hasta 300 personas para protegerse, dos mil hectáreas de coca y amapola, a punta de machete.

A partir de ese momento, fueron resucitando, una por una, todas las tradiciones que habían perdido. Crearon un sistema de autogobierno para fortalecer su control del territorio, incluyendo una guardia indígena, un consejo mayor de justicia y un sinnúmero de cabildos menores, que en realidad son equipos de trabajo que se ocupan de temas importantes para la comunidad como la salud y la educación. También recuperaron la lengua inga, la vestimenta y la medicina tradicional.

Aunque hubo amenazas, a medida que los grupos armados los vieron organizados y respaldados por el resguardo, los fueron dejando tranquilos. Ya llevan, desde 2008, sin registrar muertes violentas, cuando solo en la década anterior habían visto más de 100 en una comunidad que integran 951 familias.

“Los pueblos indígenas, si estamos vivos, es porque nos hemos logrado sostener en la espiritualidad. Y esa espiritualidad se hace necesaria para vivir en el mundo global”, reflexiona Hernando Chindoy, el gobernador que inició el proceso. En el fondo, se apalarcaron en el rescate de su identidad para hacerle frente a los demás problemas, lo que desencadenó otras transformaciones igual de profundas. En una década, pasaron de tener solo diez hectáreas de café a que casi todo el resguardo viva directa o indirectamente de éste. Con recursos de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid), construyeron una planta de tratamiento que les permite a ellos mismos tostar el café y cosechar un mejor precio en el mercado.

En la actualidad, los ingas exportan café *Heren-cia Kusnya* a la empresa People Coffee en Estonia, a Team Coffee en Estados Unidos y a Cocora Coffee en Corea del Sur. Asimismo, abrieron un local en Bogotá llamado Wuasikamas⁹.

Si bien el gobierno les ofreció programas de sustitución como el PLANTE, los integrantes de la comunidad continuaron sembrando la amapola por los réditos notables que ofrecía. Posteriormente, en el marco de los recursos otorgados por el programa *Familias Guardabosques*, iniciativa que también promovía la sustitución, el Cabildo impulsó un *Plan de Manejo Integral*, que otorgaba \$650.000 a cada familia inmersa en la producción de amapola y destinaba \$230.000 a un fondo común para las que no eran beneficiadas. Lo anterior, con el objetivo de promover la equidad en los recursos y evitar posibles reincidencias¹⁰.

Sin embargo, una vez finalizó *Familias Guardabosques*, algunos integrantes del resguardo retomaron la siembra de amapola. El papel que tuvo el Cabildo y, en especial el liderazgo de su gobernador, fue clave: dialogó con cada una de las familias, recordándoles el mandato adquirido en pro de la defensa del bienestar colectivo¹¹.

9 | Ministerio de Justicia y del Derecho y UNODC. *Caracterización agro cultural del cultivo de amapola y de los territorios afectados-Síntesis de resultados de investigación* (2019).

10 | Ibid.

11 | Ibid.

“Acudimos a la fuerza interna de lo que realmente somos. Cuando el pueblo inga se levanta y dice ‘me diferencio de la sociedad mayoritaria’, porque tengo una lengua, un vestido y una organización propia, son formas de sanar y de ganar el equilibrio que habíamos perdido como comunidad”, dice Liliana Armero.

A finales de 2018, en los resguardos indígenas había 16.589 hectáreas de coca (10% del total nacional) y en tierras de las comunidades negras 26.985 hectáreas (16% del total nacional), según datos del informe de *Monitoreo de territorios afectados por cultivos ilícitos*. Al menos siete resguardos tenían más de 700 hectáreas, incluyendo seis del pueblo Awá (tan afectado por el conflicto armado que el segundo caso abierto por la Jurisdicción Especial para la Paz gira en torno a ellos) y uno más del pueblo nukak.

La concentración de coca en estas zonas impone importantes desafíos para las estrategias de intervención que deben ser específicas y ajustadas a la normatividad, incluyendo procesos de consulta previa con las comunidades, que en muchas ocasiones quieren vivir sin cultivos ilícitos. En estos casos, la comunicación con las comunidades, la construcción de una visión conjunta del territorio y el empoderamiento de las autoridades locales son recursos estratégicos¹².

12 | Ministerio de Justicia y del Derecho y UNODC (2019). *Monitoreo de territorios afectados por cultivos ilícitos* 2018. Bogotá.

En los Consejos Comunitarios de Buenaventura, por ejemplo, la economista María Alejandra Vélez se propuso identificar las razones para que, a pesar de tener condiciones propicias para la penetración y expansión de los cultivos de coca, estas comunidades se resistieran a sembrar. Vélez encontró que la capacidad organizativa y la fortaleza del liderazgo social tuvieron un papel primordial. En el 2005, los Consejos hicieron una declaración de un conjunto de principios de conservación ambiental y de rechazo a cultivos ilícitos y en 2007 realizaron una ‘minga’ de erradicación manual por el brote de cultivos ilícitos¹³.

La experiencia de los ingas en Nariño y de las comunidades afro en Buenaventura arrojan luces sobre la manera como se puede responder a los cultivos ilícitos en resguardos y consejos comunitarios. Las soluciones partieron del capital social y cultural, dinamizado por el liderazgo de sus autoridades.

Los elementos claves fueron el reconocimiento y recuperación de las tradiciones, un plan concreto que refleja una intención colectiva y la conciencia sobre el bienestar de la comunidad. La sustitución de cultivos ilícitos, en este caso, se apalanca en un proceso de identidad cultural, que le da vida y sostenibilidad.

13 Vélez, M. A. & Lobo, I. “Challenges of Organised Community Resistance in the Context of Illicit Economies and Drug War Policies: Insights from Colombia” (2019). En *Journal of Illicit Economies and Development*, 1(1), pp. 72-79. Disponible en: <https://doi.org/10.31389/jied.15>



José Alejandro Dagua es uno de los campesinos que se ha beneficiado del proceso de sustitución de coca por gulupa de Toribío, impulsado por la decisión de la alcaldía de duplicar el tamaño del equipo local de agrónomos.



2

Agrónomos locales

“Yo veía esa mata silvestre en el monte. La comíamos y era muy sabrosa. Pero yo nunca me imaginaba que la comprarían para exportación”, cuenta José Alejandro Dagua, mientras acaricia una fruta biche de gulupa que cuelga de una troja en su finca en Toribío, en las montañas del Cauca.



Los asistentes técnicos son fundamentales para enfrentar enfermedades como la temida mancha de aceite, pero han sido escasos históricamente en el campo colombiano.

Una suerte de invernadero construido con cruces de madera y techos de plástico protege siete hileras de enredaderas que están terminando de colonizar los alambres y soltando sus ramas de vuelta al suelo. Decenas de colibríes revolotean por el cultivo, polinizando las pequeñas flores blancas que luego se convertirán en este fruto de piel morada, pepas amarillas y sabor ácido.

Hay una razón para que sean trojas techadas: ese fue el sistema que idearon conjuntamente campesinos y agrónomos, para frenar el embate de la temida mancha de aceite, una enfermedad causada por una bacteria que se propaga en condiciones de humedad y que hace tres años afectó a la gulupa.

Por su clima, Toribío es idóneo para esta fruta. Cada campesino tiene cerca de 500 plantas, cada una con unas 400 o 500 frutas, por lo que los seis meses de cosecha son de mucho trabajo, pero también de ahorro.

Que hayan llegado a ese potencial es, en parte, el resultado de una apuesta novedosa del hasta hace poco alcalde y reconocido líder nasa, Alcibiades Escué. Hoy, la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria, conocida como Umata, pasó de tener ocho a 20 asistentes técnicos, incluidos varios indígenas que regresaron tras graduarse de universidades como la del Valle. Lo hicieron porque, como dice el campesino Arturo Rivero, “tecnificarnos es el camino”.

Esto no es frecuente. En efecto, la falta de asistencia técnica es una de las mayores quejas de los campesinos. Según el Censo Agropecuario de 2014,

apenas el 16,5% de los productores agropecuarios del país había tenido acceso a asistentes técnicos, En la mayoría de los departamentos con presencia importante de cultivos de coca ese número fue menor al 3%, incluyendo Putumayo, Caquetá, Meta, Guaviare y Norte de Santander.

A una conclusión similar llegó la Misión para la Transformación del Campo liderada por el exministro José Antonio Ocampo en 2014. Solo un 44,7% de pequeños productores había recibido asistencia técnica alguna vez en la vida, según una de las encuestas citadas en el informe de diagnóstico del estado del campo de la Misión.

Las encuestas de caracterización de las familias que hacen parte del PNIS realizadas por UNODC también muestran que solo el 6% de ellas habían recibido asistencia técnica antes de ser parte del programa.

Por eso, experiencias como la de la alcaldía de Toribío de contratar asistentes técnicos comunitarios pueden resultar novedosas. “La gente se iba a recoger café en el Eje Cafetero o a raspar coca en el Bajo Naya, pero acá podemos generar empleo en una economía limpia. Somos nosotros los que tenemos que mostrar oportunidades a los jóvenes”, dice Yimer Ernesto Peteche, uno de los agrónomos que trabaja con los guluperos.

Este no es el único aporte innovador que ha hecho la alcaldía de Toribío a los cultivadores de gupupa. Proyecto Nasa, una iniciativa económica fundada por los tres cabildos municipales, opera una cooperativa de café, presta servicios públicos como

el agua y el aseo, y brinda a 200 campesinos fruticultores el soporte jurídico para postular a proyectos estatales y le prestan su contador. De ese modo, les ayudan a organizarse mejor y a suplir capacidades empresariales que no tienen.

La información más reciente del PNIS muestra que, del total de 99.097 familias vinculadas al programa a octubre de 2019, el 61% cuenta con asistencia técnica. Esto es un avance importante en términos de cobertura. La tarea pendiente sigue siendo conectar las líneas productivas que se han identificado en lo local con la demanda existente. Este fue uno de los elementos claves que permitió impulsar el cultivo de gulupa en Toribío. Pero esto solo es posible si se generan las capacidades técnicas locales que puedan crear una oferta sostenible y de calidad.

Los campesinos de Cáceres se juntaron para crear Caminos Puentes y Cauces (CPC), una empresa que repare las vías terciarias que necesitan para sacar sus productos de sustitución.





3

Empresas comunitarias

Sin vías, cualquier cultivo con que los campesinos sustituyan la coca tiene su supervivencia amenazada a largo plazo. Sin éstas, no tienen acceso a mercados, sin mercados es difícil asegurar recursos para vivir y, sin plata, la tentación de la coca —que les compran casi en la puerta de la casa— se mantiene latente.



Solo 13% de las vías terciarias está en buen estado, según Planeación Nacional, dificultando la transición a economías lícitas.

Esta realidad la están intentando cambiar los habitantes de Cáceres, en el Bajo Cauca antioqueño, y su empresa Caminos, Puentes y Cauces. Esta no es una empresa cualquiera: sus dueños y sus operarios son las propias comunidades rurales de este municipio a orillas del río Cauca.

Mejorar las vías terciarias es uno de los mayores reclamos de los habitantes de la Colombia rural. Y la pregunta del millón es quién las hará, ya que los municipios no tienen recursos para invertir en estas obras y las autoridades nacionales y departamentales suelen tirarse la pelota. Al final, pocas veces resuelven las necesidades de las comunidades. Eso motivó a los campesinos de Cáceres a juntarse en diciembre de 2016 con la idea de hacerse cargo de las vías y con el sueño de que, a futuro, cuando se materialice la promesa del Gobierno de invertir en vías rurales, puedan ser ellos —y no empresas de Medellín o Bogotá— quienes hagan las obras.

Así fue, con apoyo de Usaid, que nació CPC —como la llaman con orgullo los cacereños— y otras dos empresas comunitarias de vías: Coovialco en Briceño y Coovicom en Valencia, Córdoba. La inspiración para las tres fue la Asociación de Mantenimiento Vial (AMVI) que construye vías en todo Bolivia, incluso autopistas en consorcio con empresas extranjeras.

Para aterrizar su visión, escogieron el modelo de las asociaciones público cooperativas (APC), una figura novedosa parecida a las célebres asociaciones público privadas (APP), en la que la segunda pata son las propias comunidades. Este modelo existe

en Colombia para prestar servicios públicos como alcantarillado o recolección de basuras en municipios pequeños, pero nunca se había usado para infraestructura.

Las APC garantizan que las comunidades estén involucradas en todo el proceso vial: escogen las vías más urgentes, ponen la mano de obra y supervisan la construcción. Eso lo logran gracias a que todas las asociaciones comunitarias de Cáceres tienen voz y voto en la empresa. Asocomunal, que reúne a las 64 juntas de acción comunal de las distintas veredas, tiene la presidencia, el alcalde ejerce la vicepresidencia y presta la casa donde funciona la oficina, y todas las organizaciones productivas —cacaoteros, caucheros, ganaderos, arroceros y la cooperativa de transporte— también tienen asiento. Se suma que sus 16 empleados, salvo el gerente, son cacereños.

Son, literalmente, todo terreno. CPC sabe hacer tres tipos de obras: mantener vías que ya existen, mejorar viejos caminos de herradura en mal estado y reconstruir vías inutilizables. Esto lo hacen con su propia flota de maquinaria: un buldócer bautizado Sansón, una motoniveladora, una retroexcavadora de llanta entregada en comodato por la alcaldía y una volqueta.

Su primer experimento fue la vía de cuatro kilómetros que va hasta Anará-La Raya, perdida entre el rastrojo y la maleza tras una década de abandono. Esa obra permitió que regresaran 100 familias que se habían ido en medio de la violencia, en una época en la que solo quedaron cinco hogares poblados en esa vereda.

“Nada se cultivaba... porqué, para qué. El flete valía 60 mil pesos y el precio de venta se quedaba en el flete. Por eso, la gente tenía coca”, cuenta Abisúa Molano, líder comunitario que trabaja como inspector vial de CPC y que, como cientos de caceñeos, antes tuvo coca. “No es en Cáceres, no es en Caucasia, no es en el Bajo Cauca. Es en toda Colombia que usted quiere andar y las vías terciarias no existen”, añade.

En el país, solo el 49% de los lotes con cultivos ilícitos se encuentra a menos de 153 kilómetros de centros metropolitanos de mercado, según el informe de *Monitoreo de territorios afectados por cultivos ilícitos*. Esto significa que más de la mitad de la producción agropecuaria enfrenta condiciones desfavorables de competencia respecto de los productores localizados en áreas más próximas. Esto es aún más grave cuando se considera el mal estado de las vías terciarias y secundarias en zonas de baja densidad poblacional, que es donde tienden a localizarse los cultivos ilícitos.

De los 206.700 kilómetros de carreteras que tiene el país, 142.284 kilómetros corresponden a vías terciarias o rurales (69% del total nacional). Aunque no existe información confiable sobre la red terciaria, los datos de las vías secundarias ya muestran un panorama desolador: solo 13% está en buen estado, 65% en condiciones regulares y 22% en malas¹⁴. A

14 | Departamento Nacional de Planeación. “Documento Conpes 3857: lineamientos de política para la gestión de la red terciaria” (2016).

eso se suma que el 56% del área rural del país está a más de tres horas por carretera de sus cabeceras municipales, según un estudio sobre bienes públicos rurales realizado por el exministro Juan Camilo Restrepo y el economista Ignacio Lozano para el Banco de la República¹⁵.

Los habitantes de las regiones con coca viven en medio de carencias aún mayores. Las encuestas de caracterización realizadas a las familias que hacen parte del PNIS revelan que apenas el 48% tiene acceso a una vía terrestre, aunque el 46% describe su estado como “regular” y otro 38% como “malo”. En regiones como Caquetá, Putumayo y Guaviare, la distancia a cabeceras municipales es hasta tres horas más alta que el promedio nacional, según cifras de Restrepo y Lozano¹⁶.

El asunto es que, según estimaciones del Invías, llegar a intervenir y pavimentar todos estos corredores rurales en Colombia podría costar entre \$600 billones y \$800 billones, por lo que hacerlo es un proyecto inviable para las finanzas públicas —al menos en el futuro cercano—, teniendo en cuenta que todo el presupuesto nacional del 2019 asciende a \$258,9 billones¹⁷. Por eso es importante pensar en alternativas que surjan desde lo local, las cuales

15 Restrepo, Juan Camilo e Ignacio Lozano. “El papel de la infraestructura rural en el desarrollo agrícola en Colombia” (2015). En *Borradores de Economía*, Banco de la República.

16 Ibid.

17 Ibid.

pueden disminuir costos, optimizar procesos y generar sentido de apropiación por parte de las comunidades.

El impacto que pueden tener el mejoramiento de las vías en los territorios con cultivos ilícitos puede ser sustancial. Estimaciones que datan del 2016, muestran que las vías aumentan, en promedio, un 8,4% del ingreso anual de los hogares más pobres. Además, bajan los costos de transacción y hay más integración a los mercados, asociado a un mayor acceso a vías, lo que genera en los hogares rurales mayor especialización y menor producción para el autoconsumo¹⁸.

En Cáceres, las obras realizadas hasta finales de 2017 habían beneficiado a 25 de las 64 veredas del municipio. Para 2022, su meta es haber reparado todas las vías que identificaron en su diagnóstico inicial: 180 kilómetros que deben ser reconstruidos en su totalidad, 100 kilómetros para mejorar y 86 para mantener.

A finales de diciembre de 2018, de acuerdo con el monitoreo realizado por UNODC, Cáceres tenía 1.826 hectáreas cultivadas con coca, un leve descenso comparado con las 1.936 registradas en 2017, pero mucho mayor que las 420 hectáreas que había

18 | Sánchez Rojas, C. (2016). “El impacto de la infraestructura vial en los hogares rurales colombianos. ¿Hacia dónde van las vías?”. Documento CEDE No. 2. Bogotá: Universidad de Los Andes. Disponible en: https://economia.uniandes.edu.co/components/com_booklibrary/ebooks/dcede2016-02.pdf

en 2016. En este municipio, 1.621 familias se vincularon al PNIS y 1.539 cuentan con asistencia técnica. Sin embargo, aún no hay proyectos para comenzar a producir. Mientras tanto, distintas facciones criminales hacen presión para que las familias vuelvan a sembrar coca.

Las empresas comunitarias continúan con su empeño de arreglar las vías de acceso. Ahora el reto es garantizar las condiciones de seguridad y ponen en marcha alternativas legales que permitan a las familias dejar de depender de la coca.

HERRAMIENTAS



En Guaviare, los campesinos ex coccaleros de Asoprocegua están descubriendo que el bosque que antes tumbaban les puede dar frutos con qué vivir.



A photograph of a dense forest with a person's hand pointing to a tree trunk. The hand is wearing a silver bracelet. The tree trunk is covered in green leaves and has some white patches. A large, brown, dried leaf is hanging from a branch in the foreground. The background is filled with more trees and foliage.

4

Mercados verdes

“Ese de allá es un macano. Este de acá, un guamo bonito. Ese, un pavito. Ese chiquito es el milpesillos. Esta que se enreda, una vainilla. Allá, un moriche”. Flaviano Mahecha va recorriendo un claro en el bosque de menos de 50 metros cuadrados. A donde mira, extiende su brazo y señala otro árbol cuya fisonomía se sabe de memoria, como si leyera de una enciclopedia botánica.



Los mercados verdes, economías que permiten al mismo tiempo sustituir la coca y conservar ecosistemas que proveen servicios fundamentales, son una alternativa central para regiones como la Amazonia.

“Y esta de aquí es la palma de asaí, el tesoro del que estamos viviendo”, dice, señalando una esbelta palmera cuya copa está oculta entre árboles que no dejan ver los pequeños frutos morados que llevan años de “boom” comercial en Brasil, y que en Colombia apenas está despertando. “Si nosotros hacemos un análisis del bosque que tenemos, hay mucho que nos puede dar para comer y mejorar nuestra calidad de vida. Hay potencial alimenticio y económico, sin hacerle daño al bosque”, dice este campesino de mostacho largo y botas de caucho.

En una región como San José del Guaviare —forjada a partir de la bonanza cocalera en medio de un profundo olvido estatal—, cientos de campesinos hoy están viviendo del mismo bosque que antes pelaban para sembrar matas de coca. Ahora, en vez de desmontar y deforestar la selva amazónica en cuyas puertas ellos viven, su sustento económico depende de mantenerla en pie y de entender, justamente, el potencial de cada planta que tienen en ese interminable catálogo vegetal.

“Entre más limpio tenga un potrero, más plata tiene. Esa es la cultura acá. Pero nosotros estamos demostrando que esa idea es absurda”, cuenta Mahecha, uno de los 175 campesinos de la Asociación de Productores Agropecuarios por el Cambio Económico del Guaviare (Asoprocegua), repartidos en 39 veredas de la antigua Trocha ganadera, que hoy cosechan asaí, el ‘súper fruto’ que se ha convertido en alimento predilecto de los atletas por cuenta de sus excepcionales cualidades nutritivas.

“Nuestro propósito es elaborar productos alimenticios a partir de frutos de la biodiversidad co-

lombiana, así como alternativas económicas que apoyen su conservación”, dice Alejandro Álvarez, un economista bogotano que hace diez años fundó la marca de helados Selva Nevada, cuyos sabores vienen de frutas colombianas poco comunes. Su proveedor de asaí es Asoprocegua.

Algo similar están logrando el cacao y el caucho en zonas donde antes proliferó la coca. Al tratarse de cultivos frondosos, permiten promover sistemas agroforestales en los que no hay monocultivos tradicionales, sino que se mezclan con plantas productivas como el copoazú, el cacao maraco o árboles maderables nativos.

Estos casos muestran la importancia de que las alternativas productivas legales para los cocaleros sean ‘negocios verdes’: ambiental y económicamente sostenibles.

Por un lado, la mayor parte de la coca del país crece en tierras que alguna vez fueron bosques tropicales y albergaban una gran biodiversidad, como sucede en departamentos de la cuenca amazónica como Putumayo, Caquetá y Guaviare. Un estudio reciente publicado en la revista *Biological Conservation*, realizado por varios biólogos colombianos de la Universidad de Queensland, sugiere que el mayor vector de deforestación en la Amazonía entre 2000 y 2015 fue la intensidad del conflicto armado, especialmente cuando este confluyó con la coca¹⁹.

19 Negret, P. J., Sonter, L., Watson, J., Possingham, H., Jones, K., Suarez, C., Ochoa-Quintero, J. M., Maron, M. (2019). “Emerging evidence that armed conflict and

Es un hecho que la deforestación viene aumentando vertiginosamente en varias de las regiones de transición de la Amazonia; por esa razón —al margen de si se trata de cocaleros o no—, hay una urgencia de impulsar nichos económicos que sean ambientalmente sostenibles y desincentiven la tala indiscriminada. Entre finales de 2018 y comienzos de 2019, las alertas tempranas por deforestación se concentraron entre el 56 y el 75% en la Amazonia, según datos del Sistema de Monitoreo de Bosques y Carbono del IDEAM.

Estos fragmentos tupidos de vegetación en las fincas son muy valiosos ambientalmente porque permiten que haya conectividad, que es como los biólogos llaman al hecho de que los animales puedan moverse libremente, que las semillas circulen y que haya flujo genético entre las especies. El bosque, a su vez, garantiza que se almacene carbono, lo que contribuye a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero que causan el cambio climático.

“Acá hay deforestación y el tema es, justamente, la reforestación. Se trata de una restauración productiva, que parte de la innovación y de transferir esa tecnología a los productores”, explica Luz Marina Mantilla, directora del Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas Sinchi.

En distintos lugares, las familias que tienen coca han expresado su compromiso de parar de defores-



coca cultivation influence deforestation patterns”. *Biological Conservation*, 2019; 108176 DOI: 10.1016/j.biocon.2019.07.021

tar; para eso, sin embargo, necesitan alternativas económicas que les provean ingresos en el corto y largo plazo.

No se trata solamente de transitar hacia una actividad legal, sino que se requiere de un cambio de mentalidad: hay que pasar del cultivo de coca, que ofrece ingresos económicos a muy corto plazo —con un monocultivo que afecta la biodiversidad—, a proyectos que garanticen la productividad, un adecuado nivel de ingresos para las familias y que preserven los ecosistemas que prestan valiosos servicios ambientales a sus regiones y al país. Para esto, son claves la pedagogía, la comunicación y el trabajo directo con las familias, así como el acompañamiento técnico.



Campeſinos como Flaviano Mahecha tienen potreros con vacas, junto a áreas de bosque que han decidido preservar.



Tener un comprador asegurado, como lo tienen los cultivadores de palmito de El Placer, evita uno de los principales escollos que tienen muchos campesinos al salir de la coca.



5

Comprador asegurado

Una vez por semana, en la madrugada, Pablo Ángel Cuaran llena el camión de su cooperativa con los tallos de la palma del chontaduro y los conduce hasta la fábrica de Corpocampo, en las afueras de Puerto Asís, donde una empresa agrícola los procesa y prepara para llevarlos luego a restaurantes y tiendas en Francia, Estados Unidos y una decena de países más.



La alianza entre una empresa regional como Corpocampo y los palmicultores del Valle del Guamuez como Pablo Cuaran permite que sea una opción económicamente sostenible.

Su caso ilustra una de las mayores necesidades de los campesinos que intentan dejar la coca: sin una cadena de comercialización que asegure la venta del producto, las posibilidades de crear proyectos productivos legales que se sostengan en el tiempo son más bajas. Y, por tanto, aumentan las probabilidades de que retornen los cultivos de uso ilícito.

El palmito y el cacao fueron las primeras apuestas en regiones tan golpeadas por la violencia como la vereda El Placer, en el municipio de Valle del Guamuez (Putumayo), para ganarle a la coca. El gobierno de Álvaro Uribe le apostó al palmito, pero la empresa que les compraba (Agroamazonía) quebró por falta de liderazgo gerencial y capacidad administrativa. Una situación que dejó mal parados a los 400 campesinos socios e hizo que muchos de ellos se frustraran.

Cuaran continuó cultivando palmito a pesar de las prevenciones de muchos de sus vecinos. “¿Para qué meterse otra vez en algo que seguramente volverá a fracasar?”, le decían los amigos y las propias entidades estatales. Pero él persistió junto a 59 compañeros hasta fundar, incluso, la Cooperativa Agroindustrial y de Palmito (Coopalmito). Todas las semanas, Cuaran y sus socios entregan 6.000 tallos de un metro de longitud en la planta de Corpocampo, donde comienza el proceso de cocción y empaclado.

Hoy, dos siglos después de que la planta del palmito y el chontaduro fueran descubiertas durante la expedición científica de Alexander von Hum-

boldt, su cogollo está llegando por toneladas a Estados Unidos, Alemania, Holanda, Líbano, Chile y México. Pero, sobre todo, de manera especial a Francia, que con clientes como Carrefour, Auchan y Casino, es de lejos el primer comprador mundial. “Hay mucha demanda ahora”, dice Cuaran, representante legal de la cooperativa. “De esa empresa dependemos 60 familias. Yo estoy muy agradecido con este producto”, añade.

En total, unas 1.200 familias campesinas, afro e indígenas de todo el país le venden la materia prima a Corpocampo, una cadena comercial que hace dos meses se ganó el *Business for Peace Award* noruego, que reconoce a las empresas que trabajan con comunidades afectadas por la violencia. La demanda aún supera a la oferta, por lo que Corpocampo se ha visto forzada a comprar casi la mitad de su producción a palmicultores ecuatorianos.

Hay otros casos —demasiado escasos aún—, en que los productos buscaron a los campesinos. Así sucedió en Toribío (Cauca) con la gulupa, cuya demanda era tan grande que funcionarios del Ministerio de Agricultura andaban buscando quién la cultivara. Y es que sus ventas vienen creciendo como espuma: Colombia exportó más de 6.000 toneladas de gulupa en 2016, lo que la convierte en la cuarta fruta más vendida del país. Un 87% de ella se vendió en Holanda.

Esa demanda permanente significa que las cuentas sí les dan a los otros productores de gulupa de Toribío. Para comenzar, esta fruta —muy parecida en sabor al maracuyá, pero de clima frío— tiene un

precio elevado en el mercado: entre \$4.200 y \$5.500 por kilo pagan Nuticol y Frutas Comerciales, las dos exportadoras con las que trabajan. Ese precio cae a mediados de año, cuando entra a Europa la gulupa proveniente de Kenia y Tanzania, pero el resto de los meses se acerca al tope.

“Uno lo que necesita es que tenga mercado lo que siembra”, dice Arturo Rivera, propietario de 500 plantas de gulupa en su parcela del resguardo de Tacueyó.

Uno de los principales retos para los proyectos de sustitución de cultivos es conectar los dos extremos de la cadena: productor con consumidor y oferta con demanda.

Las encuestas de caracterización realizadas a las familias que hacen parte del PNIS muestran que el 54% de ellas venden la producción de las actividades agropecuarias legales a intermediarios; el 11% al consumidor final; el 7% al comercio al por menor, y el 4% a una organización productiva. En contraste, en el área rural dispersa, según el Censo Agropecuario de 2014 realizado por el DANE, el 20,3% de los productores le venden a una comercializadora; el 19,8% a las plazas de mercado, y el 11,2% a una cooperativa.

En todo caso, un mercado que parece consolidado puede colapsar. Al cruzar el umbral de la austera bodega de la Asociación Agropimentera del Valle del Guamuez (Asapiv), en La Hormiga (Putumayo), se ven costales arrumados uno encima del otro, bordeando la pared y casi llegando al techo.

Esos sacos apilados, sin mucha salida al mercado, son la foto de un agudo problema: la historia de éxito vertiginoso de esta cooperativa de campesinos que cambiaron la coca por una pimienta especial muy apetecida por los restaurantes —y uno de los productos más interesantes de todos los esfuerzos de sustitución de cultivos de uso ilícito en Colombia—, se viene acercando en los últimos dos años al desastre.

¿Su cruz? Los contrabandistas se percataron del sólido nicho en el mercado gourmet que ganó la pimienta negra del Putumayo y que, aprovechando la porosa frontera con el Ecuador a menos de una hora de distancia y la falta de controles por parte de las autoridades, se lo están robando casi íntegro.

Esa competencia desleal hizo que perdieran una parte gruesa de su mercado. Aunque las cadenas de restaurantes Crepes & Waffles y Wok siguen siendo sus clientes estrella —comprándoles unos 300 kilos mensuales de la pimienta orgánica de mayor categoría—, ellos pueden producir varias toneladas en ese mismo lapso. Quienes más les compraban, en cantidad, eran las empresas transformadoras de especias y condimentos, que ahora los abandonaron por una pimienta de menor categoría e ilegal.

El resultado es que la pimienta negra, el producto al que se dedicaron con más esfuerzo, pasó de su precio más alto (22.000 pesos por kilo en 2016), a oscilar entre los 5.500 y 6.000.

“Antes de haber contrabando estábamos bien. Era traiga y venda. Traía mi bulto y en la tarde me iba con mi remesa. El contrabando se parrandéó

eso”, dice Luz Aida Guerrero, vicepresidente de la cooperativa y una de las muchas mujeres pimenteras (que representan el 40% de los socios) en Asapiv.

La dificultad de acceder directamente a los mercados —locales, nacionales o internacionales—, obedece a la falta de infraestructura, de bienes públicos y de estrategias de comercialización. Esto conlleva a la participación de terceros en la cadena de distribución, lo que termina incrementando los costos de transacción. Bajo estas condiciones, los pequeños productores se ven obligados a aceptar los precios impuestos por otros agentes del mercado mientras los intermediarios se quedan con una parte significativa de las ganancias. Todo esto contribuye al detrimento del desarrollo de la pequeña agricultura²⁰.

De acuerdo con estudios de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), por cada peso que paga el consumidor urbano por sus alimentos, menos del 40% queda en el campo y el restante 60% remunera los procesos de mercado. Con los productos agrícolas aumenta el porcentaje que ganan los intermediarios, debido a los riesgos de pérdidas de posproducción: el 70% del precio de los productos perecederos se queda en sus manos, mientras un 30% (o menos) de margen constituye las ganancias del productor²¹.

20 Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) (2015). El papel de los pequeños agricultores en la producción y el comercio sostenibles de los productos básicos. (TD/B/62/9)

21 Téllez, G. & Cubillos, A. (2013) *Mercadeo agropecuario*. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia.

Pero no todos los intermediarios son iguales; algunos varían dependiendo del producto, el tipo del cultivador y el mercado al cual se destine la cosecha. La apertura de nuevas opciones de comercialización, el crecimiento de la red de supermercados, los expendios especializados y la emergencia de organizaciones como Corpocampo, contribuyen a reducir el número de intermediarios y la mejora de ingresos para los productores. Esto requiere de la acción colectiva por parte de los cultivadores y productores pecuarios, para facilitar las negociaciones y asegurar la oferta requerida.



Muchos de los palmitos tiernos que cortan a diario en el Putumayo suelen terminar en restaurantes bogotanos o incluso exportados a Francia.



La improbable alianza entre unos campesinos ex cocaleros, unos ingenieros de alimentos y un empresario bogotano permite darle sostenibilidad a la cadena de asái.



6

Alianzas empresariales

Tras una fachada blanca en una calle destapada de San José del Guaviare, se esconden una hilera de máquinas metálicas y un cuarto frío donde se trabaja sin parar de lunes a viernes. Esta planta es parte del secreto para que el asaí que cosechan los campesinos de Asoprocegua en sus fincas tenga un mercado real.

En la planta del Consorcio Bioguaviare SAS en San José del Guaviare se procesa el asái que usan muchos restaurantes y negocios en el resto del país.



Su propietaria es el Consorcio Bioguaviare SAS, la empresa que convierte los diminutos frutos de la palma de asaí, mantiene su pulpa violeta extraída en adecuados niveles de frío y luego se la vende a los clientes en Bogotá y otras ciudades del país.

Pero no es una empresa cualquiera: sus dueños forman una improbable alianza entre actores especializados en las distintas fases de producción, que podría ser un modelo para otros procesos de sustitución de coca en el país. Sus socios, en partes iguales, son los campesinos locales de Asoprocegua, los ingenieros de alimentos de Bioingen y los emprendedores de la heladería bogotana Selva Nevada.

“Unimos las tres fuerzas: la social, la técnica y la empresarial, en igualdad de condiciones y valorando las fortalezas de cada uno”, explica Alejandro Álvarez, dueño de helados Selva Nevada.

Esa alianza, que nació hace cuatro años, ya está viendo sus frutos: en 2017 procesaron 80 toneladas de asaí, que duplicaron el año pasado. De su único comprador hace un par de años —los helados de Álvarez, justamente—, han pasado a una decena, como Alsec, Corpocampo o Selvática.

Por ahora están concentrados en incrementar la producción de asaí, aunque ya tienen otras dos líneas de negocio identificadas: el aceite extraído de los frutos de burití y seje (muy valorados en la industria cosmética), y los desechos del fruto de asaí, cuyo contenido nutricional los hace aptos para usos que aún están explorando.

Saben, sin embargo, que conquistar el paladar de los consumidores es difícil, aun cuando se traten de especies autóctonas. Como dice Flaviano, “dar a conocer un producto nuevo es la pelea más grande: la gente está pegada a lo tradicional, como la uva, la mora o la fresa”.

En Colombia lo están haciendo de la mano de empresas pioneras —como Selva Nevada o la cadena de restaurantes Wok—, quienes, con sus helados y jugos naturales, están ayudando a abrir ese apetito por los frutos selváticos.

“Nuestro propósito es elaborar productos alimenticios a partir de frutos de la biodiversidad colombiana y, de esa manera, alternativas económicas en la región que apoyen la conservación”, dice Alejandro Álvarez, quien empezó su carrera trabajando en el grupo de negocios verdes del Ministerio de Ambiente antes de fundar su heladería, hace una década.

La Misión para la Transformación del Campo señala que una forma de aumentar el poder de negociación de los pequeños productores es consolidar las formas asociativas que permitan elevar los volúmenes ofrecidos y la periodicidad de la entrega, y mejorar así el precio al que se venden sus productos.

De acuerdo con la Misión, uno de los principales desafíos es que estas iniciativas raramente prosperan en un contexto en el que los pequeños productores suelen actuar de manera individual y en el cual hay una desconfianza generalizada. Estas condiciones llevan a que la mayoría de los productores no estén dispuestos a establecer alianzas y menos a sacrificar sus intereses coyunturales, con

el fin de alcanzar unas condiciones equitativas y estables en el futuro²².

La posibilidad de generar alianzas y asociaciones está vinculada con el capital social y las relaciones que existan en la comunidad. En el caso de las familias que hacen parte del PNIS, un dato que surge a partir de las encuestas realizadas por UNODC, es que el 61% percibe que las relaciones en su comunidad son “buenas” y el 15% “excelentes”; además, el 66% asegura realizar trabajos comunitarios y el 62% participa regularmente en reuniones. Este puede ser un punto de partida y una oportunidad para avanzar en la generación de esfuerzos colectivos entre la población.

En últimas, como subraya la Misión Rural, las asociaciones permiten formar volúmenes para tener una presencia más continua y representativa en los mercados, mejorar la calidad de los productos, fortalecer la capacidad de negociación frente a los agentes de mayor poder comercial, y buscar canales para la venta de sus productos a un mejor precio.

Como dice Rafael Antonio López, el vicepresidente de Asoprocegua: “Nosotros cumplimos con traer los frutos y cuidar los bosques. Los otros transforman y otros venden. No podemos vivir el uno sin el otro”.

22 | Misión para la Transformación del Campo (2014). Propuesta para Desarrollar un Modelo eficiente de Comercialización y Distribución de Productos. Documento Técnico. Centro Regional de Estudios Regionales Cafeteros y Empresariales (CRECE).



Al unirse, campesinos ex cocaleros y científicos están buscando conjuntamente soluciones a una enfermedad fitosanitaria como el mal suramericano de la hoja que ha golpeado al caucho en Caquetá.



7

Ciencia campesina

Desde hace una década, el “mal suramericano de las hojas” viene afectando a miles de árboles de caucho en todo el Caquetá. Esta enfermedad —de nombre irónicamente poético—, así como el hongo que la genera, se han convertido en la mayor pesadilla de miles de campesinos cauchicultores, muchos de los cuales se despidieron de la coca y le vienen apostando a este cultivo.



El proyecto de investigación de los caucheros, el Sinchi y la Universidad de la Amazonia ha sido incluso financiado con recursos de regalías.

Aunque todavía no se ha logrado controlar esta enfermedad —que se propaga con facilidad debido a las condiciones ambientales del Caquetá—, el departamento es epicentro de un experimento científico muy novedoso y sin equivalente en Colombia: cientos de campesinos agremiados están trabajando mano a mano con investigadores de un instituto científico estatal y una universidad pública. Su meta es encontrar una variedad de caucho, propia de Colombia, que sea resistente a este patógeno, que comienza con diminutas manchas y termina debilitando todo el árbol.

El caso de las 1.224 familias caucheras que se encuentran organizadas en el gremio campesino de la Asociación de Reforestadores y Cultivadores de Caucho del Caquetá (Asoheca), prueba no solo que la inversión en ciencia, tecnología e innovación es vital para el desarrollo del campo y el bienestar de sus habitantes, sino que es un aliado clave para que miles de coccaleros en todo el país puedan apostarle a otras opciones productivas en la legalidad. Y también es una prueba de que no esperan que baje desde la academia, sino que quieren ser protagonistas.

Protegido del sol por su gorra y un saco mangas largas, José García se pasa el día recorriendo potreros en zigzag y revisando unos árboles que solo hace poco lo sobrepasaron en altura. La misión de este indígena nasa, de 26 años, es monitorear cómo van creciendo estos árboles de tallo esbelto y ramas incipientes que se extienden hasta el horizonte.

Aunque a primera vista se vean idénticos, en realidad son palos de papás distintos. Los núme-

ros en las estacas señalan que se trata de un clon del caucho natural, que responde de manera diferente a factores como el clima o el suelo. Aún son jóvenes, pero en un año estarán listos para el corte transversal que los caucheros llaman “sangría” y que hacen para recoger el coágulo de donde sale el material. Este es uno de los ‘campos clonales a gran escala’, donde esta alianza entre campesinos, universidades y científicos, intenta cambiar el destino de un promisorio cultivo que ha sufrido años de vacas flacas por culpa del hongo *Microcyclus ulei*.

En esta finca experimental en El Paujil, los caucheros de Asoheca, los científicos del Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas Sinchi y los investigadores de la Universidad de la Amazonia, vienen intentando resolver el misterio de cómo ganarle al temible “mal suramericano”, con recursos del sistema general de regalías administrados por la Gobernación del Caquetá.

“En unos años esperamos tener clones caquetanos que pueden funcionar en todo el país. Si con buenas prácticas uno logra liberar un clon de alta productividad, resistente a plagas y enfermedades, se pone al nivel de cualquier parte del mundo”, cuenta Ismael Dussan, un ingeniero agrónomo y campesino que lidera el área de extensión técnica de Asoheca y es investigador en el proyecto. “Nosotros podremos decir que fuimos los pioneros”, dice.

Aunque el caso de Asoheca muestra cómo los campesinos acuden a la ciencia para resolver un problema, hay pocos datos que permitan entender cuánto acceso a ciencia, innovación y tecnología

tienen en realidad los pequeños productores rurales colombianos.

Uno de los pocos indicadores sobre acceso a tecnología —además de la asistencia técnica—, se refiere a cuántas unidades productivas agrarias tienen maquinaria que les ayude en su trabajo, desde la siembra hasta la cosecha. Según datos del Censo Nacional Agropecuario de 2013, apenas el 29% de los productores en áreas rurales dispersas tienen alguna (proporción que es aún más baja en territorios indígenas y afro, donde solo 16,8% comunidades cuentan con ella).

Debido a que ni Colciencias, ni tampoco el sistema general de regalías, tienen información pública que desglose lo que se sabe sobre los beneficiarios de proyectos, tampoco es posible entender si hay más campesinos o excocaleros que se estén beneficiando o estén activamente involucrados en proyectos de investigación científica.

Sin embargo, este trabajo de la ciencia con las comunidades ha sido uno de los focos de institutos científicos estatales como el Sinchi, el Alexander von Humboldt o el IIAP del Pacífico, así como de ONG ambientales como la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS), Tropenbos, Fondo Acción, Natura, Panthera o MarViva.

El Sinchi, por ejemplo, viene adelantando investigaciones sobre cómo construir cadenas comerciales para especies nativas como los frutos amazónicos o las maderas finas que no están en peligro de extinción (algo que los científicos ambientales han llamado el ‘biocomercio’). Ese trabajo evidencia

cómo el sector ambiental y sus institutos de investigación están aportando soluciones a problemas serios.

Como reflexiona el campesino guaviarense Flaviano Mahecha: “Todavía no nos damos cuenta de qué más tienen nuestros bosques en plantas medicinales, cosméticos, ornamentales, cortezas, nueces, látex y raíces. Es un trabajo de investigación muy amplio. ¿Qué más hay que podamos consumir y que sea un mercado adecuado?”.



La ganadería silvopastoril está convirtiéndose en una opción para campesinos como Hamilton Tapias que cambiaron la coca por la ganadería extensiva, una actividad legal pero con alto impacto ambiental.





8

Acuerdos de conservación para cerrar la frontera agropecuaria

Muchas veces los problemas para los campesinos ex mocaleros surgen después de que han sustituido los cultivos ilícitos, porque es en ese momento cuando más necesitan del acompañamiento estatal, que suele ser muy precario.



El modelo silvopastoril resulta una buena opción para Hamilton Tapias porque le ayudó a volver más productiva su finca gracias a un uso distinto del suelo, cosa que a su vez le permite separar áreas para la conservación.

En un contexto de creciente deforestación, resulta clave encontrar soluciones al problema de los cultivos de coca asegurándose de que las actividades productivas de los campesinos que viven en zonas ambientalmente sensibles sean más sostenibles.

Es el caso de los ganaderos —y antiguos cocaleiros— de Puerto Camelias, un corregimiento sobre el río Caguán en Cartagena del Chairá que por muchos años, en los ochenta y noventa, se convirtió en la capital colombiana de la coca: era uno de los puntos de donde más salía cocaína procesada, y estaba en el municipio más cocalero del departamento con más coca de Colombia. Entre 2004 y 2005 los operativos militares del Plan Patriota no solo lograron replegar los bloques de las Farc que allí operaban, sino que, en medio de combates y fumigaciones, la coca desapareció y migró a Nariño, Putumayo y Norte de Santander, donde hoy permanece.

En medio de una transición económica súbita y sin ningún acompañamiento del Estado, la ganadería surgió como la única alternativa viable en una zona donde lo producido solo sale por el río. Allí los campesinos venden, a las lanchas que pasan a diario, la leche y el queso que producen en sus fincas.

Pero el nuevo negocio trajo un nuevo obstáculo: para tener vacas necesitaban más potreros que antes, así que empezaron a tumbar bosque a diestra y siniestra. Fue así que en todo el Bajo Caguán, cambiaron un problema agudo —e ilegal— por otro que, siendo legal, es igual de crítico. Hoy Cartagena del Chairá es el tercer municipio que más pierde bosques de Colombia: se tumban 10.241 hectáreas

cada año, que equivalen a 1.300 canchas de fútbol. Estamos hablando de una hectárea cada siete horas. Todo para poder criar vacas.

“Vea, yo antes tumbaba todo, pero me convertí en una persona diferente”, dice Hamilton Tapias, trepado en su caballo alazán, mientras recorre un extenso potrero en el que se asoman decenas de arbolitos de dos metros de altura. Sonriendo, recita los nombres de sus árboles con la emoción de un botánico: ahumados negros, achapos, cedros, flormorados y medio cominos.

Dentro de poco, cuando crezcan, ahí pastarán y dormirán las 150 vacas que tiene en compañía de su familia. “Esto se llama silvopastoril. Significa que las vacas viven con los árboles”, explica.

Gracias a este plan, Tapias y su finca son parte de un experimento innovador que busca frenar la deforestación en la región, un experimento que comienza con esos arbolitos de dos metros en la mitad de unos potreros

Tapias también cercó con alambre los caños cercanos, para que sus vacas no se metan y contaminen el agua y subdividió varios potreros con cercas hechas de árboles nativos, para que los pastos puedan volver a crecer mientras el ganado rota entre ellos. Finalmente hizo una especie de corral lleno de plantas, porque sabe que el secreto para tener potreros más pequeños consiste en alimentar mejor a las vacas.

“A esto es a lo que yo le llamo mi cuadro nutricional. Vea, este es el botón de oro, este otro es el

matarratón, el de acá es *king grass*, ese de allá, Gólgota y el de la hoja grandota, bore”, dice, orgulloso, mostrando el corral cuyas plantas deshojadas, secas y trituradas, se convierten en suplementos alimenticios o lo que los técnicos llaman un banco mixto de forraje.

Como sus vacas ahora comen mejor y necesitan menos pasto, Tapias hizo un compromiso que no piensa romper: va a mantener intactas las 25 hectáreas de bosque nativo que rodean el potrero donde está construyendo su casa de madera. Además, está dejando que se recupere un corredor ‘cañero’ —como llaman en el Caguán al bosque que está intervenido y que los científicos denominan ‘secundario’— para que los animales puedan cruzar de un lado a otro y reproducirse tranquilos.

Son acciones pequeñas, pero que sumadas tienen un alto impacto ambiental.

Para que este tipo de proyectos sean sostenibles en el tiempo, se necesita que esas pequeñas acciones traigan verdaderos beneficios para los campesinos. El primero consiste en elevar su productividad: necesitan vivir mejor en una región donde la ausencia del Estado ha sido notable y donde nunca llega un veterinario o un agrónomo; de lo contrario, difícilmente se le medirían.

Una mayor productividad abre las puertas para que haya cambios reales en el medio ambiente, que vendría a ser el segundo beneficio. Por un lado, este modelo puede ayudar a frenar la pérdida de bosques en el Caquetá —puerta de entrada a las selvas de la Amazonía— y convertirse en un muro de

contención para preservar la mayor selva tropical continua del mundo. Por otro lado, es una solución al problema del ganado, que es el sector que más aporta gases de efecto invernadero en Colombia, incluso por encima del petróleo, los carros o las fábricas. Al haber más árboles donde están las vacas, el metano que ellas emiten se convierte en oxígeno, neutralizando los daños.

Si se suman estos beneficios, el efecto es grande. Junto a Hamilton, hay otras 48 familias campesinas en Puerto Camelias haciendo pequeños cambios en sus fincas, como parte de un proyecto piloto de la ONG Fondo Acción, llamado ‘Paisajes conectados’, financiado con recursos de cooperación internacional.

Cada una de esas familias firmó un acuerdo de conservación, en el que se compromete a ciertas actividades a cambio del apoyo técnico para realizar esos cambios. Por ejemplo, el alambre que les permite hacer las cercas o las semillas de árboles nativos. Luego un técnico de Fondo Acción los visita cada determinado tiempo para ver cómo van avanzando. Aunque apenas están iniciando con el nuevo modelo en sus fincas, entre todos los que participan suman más de 5.500 hectáreas. Si cada familia consigue mantener intacta su cuarta parte de bosque, estaría evitado la pérdida de una décima parte de la deforestación anual de Puerto Camelias, que es tan grande como el departamento de Sucre.

Eso muestra el potencial de hacer este tipo de trabajo con los campesinos de las regiones más taldadas del país como Caquetá, Guaviare, el sur del

Meta, el norte de Chocó, el Catatumbo, el sur de Bolívar o el Bajo Cauca, donde la deforestación se ha disparado, en gran medida, por la ganadería extensiva. Como subraya Luz Marina Mantilla del Instituto Sinchi, “las comunidades están dispuestas a hacer acuerdos y eso es una ventana de oportunidad. Son alianzas de restauración con todos los actores del sector”.

Una investigación publicada por tres científicas colombianas, dos de la Universidad de Stony Brook en Estados Unidos y una de la Universidad Nacional de Colombia, en la revista científica *BioScience* demostró que la ampliación sin control de la frontera agropecuaria ha sido uno de los mayores vectores de pérdida de bosques en la Amazonía, aún más que la coca²³. Por otro lado, tras analizar los cambios en la cobertura vegetal entre 2002 y 2007, otro grupo de científicos colombianos probó que las áreas protegidas logran reducir exitosamente la transformación de bosques en cacaes²⁴.

La sustitución de cultivos ilícitos puede contribuir a la restauración y conservación de ecosistemas estratégicos del país, así como a evitar que

23 Dávalos, L., Sánchez, K. y Armenteras D. (2016). “Deforestation and Coca Cultivation Rooted in Twentieth-Century Development Projects”. En *BioScience*, Vol. 66, Issue 11, Noviembre 2016, p. 974-982.

24 Dávalos, L., Bejarano, A., Hall, M., Correa, L., Corthals, A. y Espejo, O. (2018). “Forests and Drugs: Coca-Driven Deforestation in Tropical Biodiversity Hotspots” En *Environmental Science and Technology*, Vol. 45, Issue 4, enero 2011, p. 1219-1227.

continúe la expansión de la frontera agrícola²⁵. Este es un asunto vital, teniendo en cuenta que el 61% de las hectáreas de coca se encuentra fuera de esta frontera, que es el límite que separa las áreas aptas para actividades agropecuarias de aquellas que Colombia se ha propuesto preservar por su valor biológico y los servicios que prestan, como la oferta hídrica o la captura de carbono.

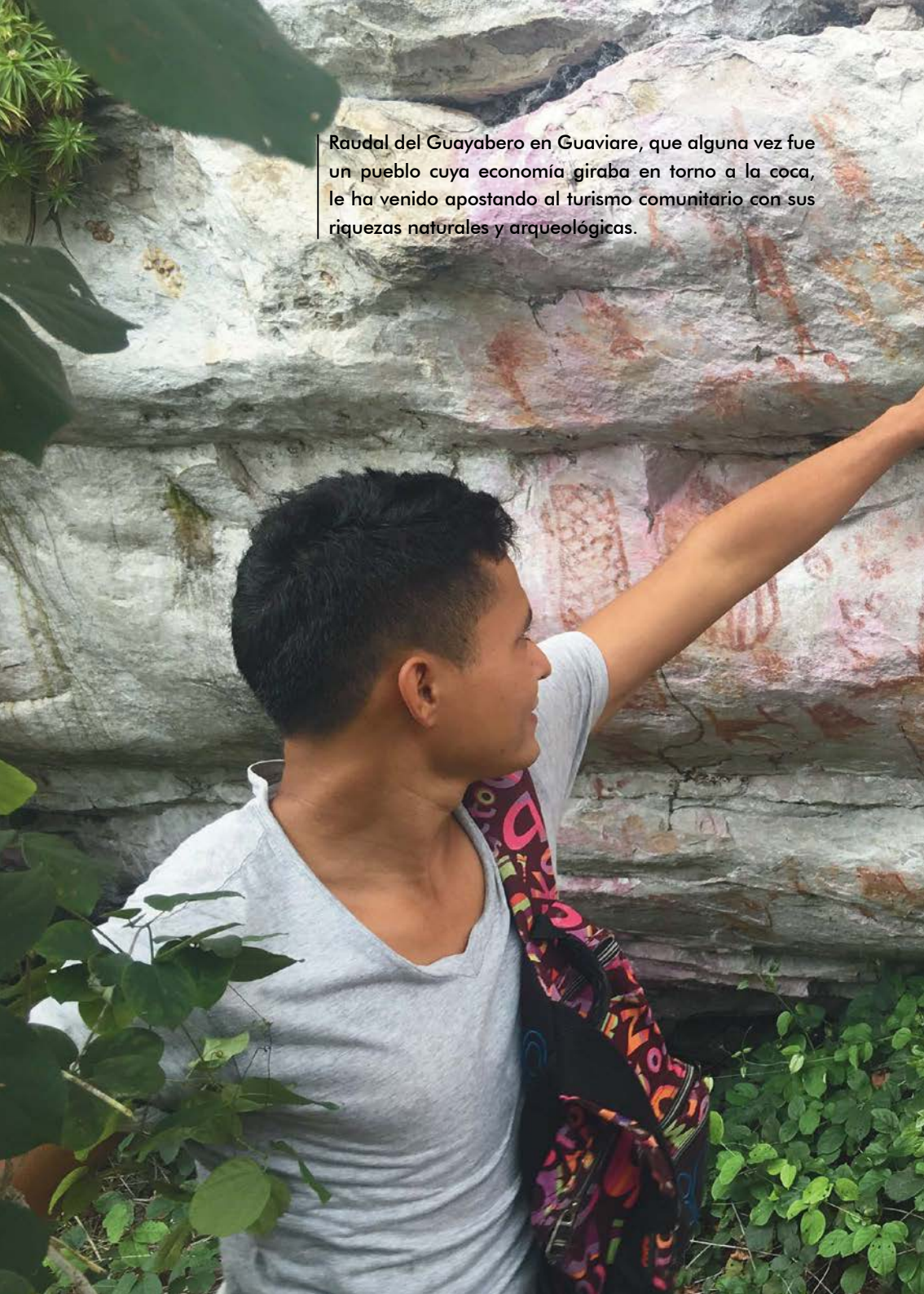
“Si el campesino hubiera tenido el conocimiento que tiene hoy, esas tasas de deforestación jamás se habrían dado. Que la gente hable de conservación, fuentes hídricas, aislamientos y conectividad es un logro importantísimo”, asegura Víctor Garcés, el líder comunitario más respetado de Puerto Camelias. “El tema no es solo decir que tengo dolor de cabeza, sino ¿qué voy a hacer para quitármelo?”.

25 La frontera agrícola se define como “el límite del suelo rural que separa las áreas donde las actividades agropecuarias están permitidas, de las áreas protegidas, las de especial importancia ecológica, y las demás áreas en las que las actividades agropecuarias están excluidas por mandato de la ley o el reglamento”. Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA). (2018). “Metodología para la identificación general de la frontera agrícola en Colombia”. Bogotá: UPRA.



El gana-gana de aumento de productividad y sostenibilidad ambiental es un ejemplo de trabajo conjunto entre campesinos en zonas biodiversas y científicos ambientales del sector ambiental.

Raudal del Guayabero en Guaviare, que alguna vez fue un pueblo cuya economía giraba en torno a la coca, le ha venido apostando al turismo comunitario con sus riquezas naturales y arqueológicas.





9

Campesinos como guías turísticos

Por más de tres décadas, el tesoro color ocre que resguarda el Raudal del Guayabero se mantuvo escondido entre el verde clarito de la coca.

Las pinturas rupestres precolombinas de la serranía de la Lindosa, como Cerro Azul, Nuevo Tolima y Raudal del Guayabero, están atrayendo cientos de viajeros y son parientes de las halladas en el Parque Nacional Chiribiquete, recientemente designado patrimonio de la humanidad por la *Unesco*.



Paradójicamente, el conflicto y la prohibición de las Farc a que entraran turistas, llevaron que muy pocas personas llegaran a este cañón en el río Guayabero, donde el denso bosque del Guaviare protege uno de los yacimientos arqueológicos más importantes —pero menos conocidos— de Colombia.

En las lisas paredes de un afloramiento rocoso, propio de la Serranía de la Lindosa, se encuentra uno de los murales más importantes de pintura rupestre del país que aún no ha podido ser datado por los arqueólogos, pero se cree que supera los 400 años de antigüedad. En las lajas blancuzcas de cuatro metros de altura, se superponen crípticas escenas en las que se reconocen figuras de dantas, lagartos, mujeres embarazadas, escaleras y danzas rituales.

Sus protectores: una comunidad que por años vivió de la coca y que hoy le está apostando a un proyecto de turismo del que actualmente viven unas 60 personas.

La historia del Raudal comenzó a cambiar hace cuatro años. En parte porque el Frente 7 de las Farc dejó de oponerse a la llegada de turistas, pero sobre todo porque la comunidad de este caserío se organizó y decidió montar su proyecto.

Hoy, gracias al trabajo coordinado entre los guías de San José del Guaviare y la comunidad, hasta 100 turistas recorren a diario la trocha que separa a el Raudal de la capital del departamento. Durante el trayecto, los turistas conversan con la comunidad, comen alimentos preparados por ellos, atraviesan el cañón en una canoa motorizada, visitan las pinturas con un guía baquiano y suben a un mirador

natural que tiene una imponente vista de todo el río y del Parque Nacional de la Macarena.

“Con el turismo estamos saliendo adelante. Es la única entrada que tenemos y la mantendremos conservando lo que está alrededor de río, la selva y los animales”, dice Disney Ardila, una mujer de 40 años que recibe a los visitantes en una caseta de madera sobre el río y lidera la organización.

A pesar de que en el Raudal todos conocían la gigantesca laja de piedra dibujada que está a menos de 15 minutos de sus casas, pocos le veían un valor singular. A fin de cuentas, muy pocos llegaban—en los años más violentos— a explorar este complejo de pinturas desperdigadas por las paredes verticales del misterioso afloramiento geológico de la Serranía de la Lindosa.

Descritas por primera vez, en los años 40, por el aventurero francés Alain Gheerbrant, han fascinado a arqueólogos y antropólogos. “Aunque la mayoría de la gente ni siquiera sabe que tenemos arte rupestre, Colombia realmente se puede convertir en un polo de turismo universal, porque lo que tenemos es comparable con pinturas como las de Lascaux en Francia o Altamira en España. Tienen un valor incalculable”, dice Fernando Urbina Rangel, quien ha dedicado gran parte de su vida a estudiar los pictogramas y pinturas rupestres del país.

El Gobierno Nacional solo declaró las pinturas de la Lindosa como área arqueológica protegida en mayo de 2018. Gracias a ese proceso, el Instituto Colombiano de Antropología e Historia (Icanh) hizo un inventario completo de los pictogramas y formuló

un plan de manejo con los campesinos vecinos, que identifica los usos permitidos y prohibidos.

El auge del turismo aún es modesto, pero le está sirviendo al Raudal para reponerse de años de aislamiento y escasez de oportunidades económicas. Se nutren de la llegada de extranjeros, que viene creciendo en Colombia velozmente y que los locales consideran un dividendo del Acuerdo de Paz con las Farc. El año pasado llegaron al país 4,3 millones de turistas, más del doble que en 2014.

Aún falta mucho para que la naciente industria se consolide, pero poco a poco han ido alejando los fantasmas del conflicto armado. El turismo está creciendo velozmente en Guaviare gracias a actividades como el avistamiento de aves y a atractivos como las formaciones rocosas de la Lindosa. De apenas un centenar de personas que se aventuraban hace una década, San José pasó a registrar 12.000 turistas en 2015 y 19.000 en 2017, según cifras departamentales.

Igual que sucede con los bosques y la fauna, la única manera viable de conservar la pintura rupestre es con las comunidades como Raudal. “Debemos concentrarnos en la economía que generarían si se conservan bien. Ese incentivo es, siendo realistas, el único que funciona”, dice Urbina, quien sueña con sacar adelante un programa nacional educativo en torno a la arqueología y la paz. “Si no, nos puede pasar lo del África mediterránea, donde el 75% de las pinturas rupestres terminaron saqueadas y en colecciones privadas en Europa”.

La fórmula para lograrlo puede estar en el Raudal del Guayabero y en modelos que conviertan a las comunidades en socios de la conservación, como sucedió con estos antiguos cocaleros que hoy son guarda-ruinas. Por lo pronto, Ardila y sus compañeros tienen un plan: quieren hacer un sendero ecológico entre las pinturas y el caserío, que ayude a educar a los visitantes sobre el bosque y los animales que viven allí, como los monos churucos.

Distrito Chocolate es una tienda en Bogotá que vende chocolates producidos por decenas de iniciativas campesinas de todo el país, muchas de las cuales sustituyeron coca por cacao.



WUASIKAMAS



Arte, café y paz
tejidos con Resiliencia Inga

www.wuasikamas.org



Hernando Chindoy vigila la puerta del Café Wuasikamas, propiedad de la comunidad inga que sustituyó amapola por café, en el centro histórico de La Candelaria en Bogotá.

AMAS



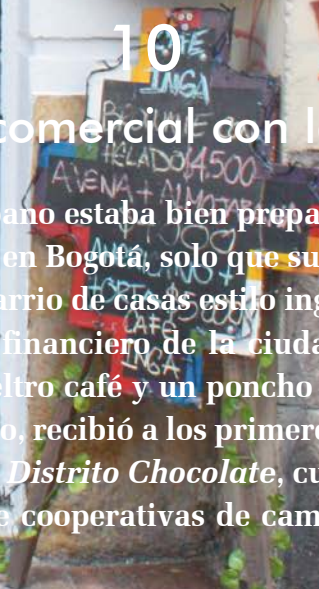
WUASIKAMAS
Un inspirador
aprendizaje
de los
GUARDIANES
DE LA
TIERRA
Cultura
Artes
&
Café
para la
Reconciliación



10

Cadena comercial con la ciudad

Juan Antonio Urbano estaba bien preparado para la fría tarde de octubre en Bogotá, solo que su atuendo poco se ve en el elegante barrio de casas estilo inglés situado justo al lado del centro financiero de la ciudad. Ataviado con un sombrero de fieltro café y un poncho blanco colgando alrededor del cuello, recibió a los primeros comensales de su nuevo proyecto: *Distrito Chocolate*, cuyos propietarios son un centenar de cooperativas de campesinos cacaoteros de todo el país.





El cacao se ha convertido en uno de los productos más valorados por los campesinos que se han alejado de la coca.

Urbano estaba abriendo su segunda tienda en una casa de estilo victoriano en el barrio Quinta Camacho, en el norte de la capital. La primera está a punto de reabrir sus puertas en un nuevo local en el centro histórico de La Candelaria, tras haber funcionado durante cuatro años en una casa adornada por coloridos murales de frailejones y osos de anteojos sobre el eje ambiental de la Avenida Jiménez que se les quedó pequeña.

En *Distrito Chocolate* venden todo tipo de productos a base de cacao a estudiantes universitarios y turistas extranjeros: chocolate caliente —con clavos, con cardamomo, en agua, en leche de almendra—, barras, bombones, cervezas, choco-chais y, para los más avezados, la chúcarula, un brebaje que contiene siete granos distintos y está destinado a dar fuerzas para un día de trabajo en el campo.

Estas tiendas son la vitrina —y la apuesta económica— de la Red Nacional de Cacaoteros, una red de 76 cooperativas que aglutinan a más de 20 mil campesinos que cultivan cacao y preparan chocolates finos en todo el país, para llegarle a los consumidores urbanos. Ellos buscan complementar sus ingresos y hacer más sostenibles sus procesos comunitarios. Como dice Urbano, “para cualquier cadena productiva Bogotá es el más grande mercado, donde el chocolate puede brillar por su calidad, sus historias y por su aporte a la paz y la reconciliación del país”.

Urbano y su familia son un ejemplo de ese tipo de procesos. Durante décadas, la región donde viven, en el occidente de Boyacá, fue una de las más violentas de Colombia, marcada por las guerras en-

tre facciones que luchaban, primero, por el control de las minas de esmeralda y, luego, por la coca. Era una tierra de nadie, donde la gente era asesinada por razones tan triviales como venir de un pueblo rival.

Alrededor de 2007, un grupo de habitantes de pueblos como Pauna, San Pablo de Borbur y Otanche decidieron poner un alto a la espiral de violencia en torno a la coca. Con la ayuda de la Iglesia Católica, buscaron al Gobierno Nacional —que estaba listo para comenzar a asperjar por aire las casi 7.200 hectáreas que había en la región— y le plantearon un paro si no los apoyaba en un esfuerzo de sustitución de cultivos concertada. Como resultado del diálogo, el gobierno les proporcionó semillas de cacao gratuitas y agrónomos. Tras tres años, se convirtieron en la primera región de Colombia en ser declarada 100 por ciento libre de coca por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.

Su cacao rápidamente empezó a tener reconocimientos. Además de ganarse el premio EmprenderPaz a los negocios que construyen paz localmente, una muestra proveniente de Pauna ganó el premio al ‘cacao de oro’ en 2014. “Nosotros ni lo creíamos. Imagínese, nunca habíamos figurado por nada bueno”, dice Urbano, que rápidamente vio la necesidad de aglutinar a los cacaoteros de todo el país en una red para ser más visibles ante el Estado.

El premio de ese concurso organizado por la agencia de cooperación suiza era conocer Europa: ocho campesinos de la región, incluyendo a Urbano, visitaron el Salón del Chocolate en París, las fábricas de Ferrero en Italia, Nestlé en Suiza y Felkins

en Bélgica. Como dice Urbano, “descubrimos que detrás de los granos de cacao que nosotros producimos hay un negocio multimillonario y mundial. Y que allá sí lo hacen valer”.

Ese viaje les despertó un nuevo sueño: ahora no solo querían vender el grano de cacao sino transformarlo en un producto gourmet, para agregarle valor. La epifanía les llegó mientras caminaban por una calle flanqueada por chocolaterías en Brujas. Allí nació la idea de crear la marca y la tienda *Distrito Chocolate*.

Hoy, en su tienda, venden los chocolates finos producidos por una veintena de marcas de organizaciones de todo el país: Floral de la Sierra de Guardabosques de la Sierra en Magdalena, Pazzabor de Palmasur de Tumaco, los Chocomayo con ají de Asopa Loro Uno en Putumayo, ChocoSinú de IntegraSinú en Córdoba, Quinchas de Cipa Otanche, que hacen las mujeres de Canipa de Aprocampo en Pauna, Choconato de Asoprório de Cesar, Chocotata de Aprocalg de Huila y Santa Rosa de Aprocasur de Bolívar. Todos estos chocolates salen de comunidades que algún momento sustituyeron coca.

Emprender, como campesinos en la ciudad, no es fácil. Urbano cuenta que en 2015, un mal consejo los llevó a abrir su primer local en el centro comercial Santafé y uno segundo en Gran Estación, donde los clientes mostraron poco interés en comprar productos campesinos. En 2016, casi en bancarrota por el costo de los arriendos, se replegaron al pequeño local de seis mesas en La Candelaria donde prácticamente arrancaron de nuevo. Desde entonces, *Distrito* ha prosperado.

“Tres años en que pasamos el valle de la muerte como cinco veces. Emprender en Colombia es muy difícil y aún más cuando tomas malas decisiones, unas llevadas por las emociones cuando es un tema serio de planeación. Y, claro, para eso necesitamos más acompañamiento del Estado”, dice Urbano.

Los indígenas inga de Aponte, para consolidar su proceso, también le están apostando a una tienda en La Candelaria, que les queda a 22 horas de recorrido en carro. Su tienda se llama Café Wuasikamas —que en español significa “ser guardián del territorio”— y que para ellos ejemplifica la transición de la ilegalidad y la violencia de la amapola a la conciencia ambiental y la recuperación de ecosistemas, a través del cultivo de café. Su marca también la bautizaron con el mismo nombre, la registraron y hace poco lograron obtener la licencia de exportación.

Todos los ingresos que deja el café retornan a la comunidad. Una parte se usa para pagarles a los 350 productores 500 pesos más por kilo que los intermediarios. Otra parte se le entrega al cabildo de economía del resguardo para que se reinvierta en otros proyectos productivos. Por último, un 40% se destina a un fondo para la reconstrucción de la cabecera del resguardo, afectada por una falla geológica en 2016 que dejó la iglesia y más de 300 casas gravemente dañadas.

Estas tiendas son ejemplos de cómo las cadenas comerciales directas pueden acortar la distancia con el campo colombiano, reduciendo la dependencia de intermediarios y permitiendo a sus productores recibir mejores precios por sus productos.

Este no es el único vínculo que está surgiendo con los consumidores en las ciudades. Una nueva generación de chefs colombianos —que está llamando la atención de medios extranjeros como *El País* de España, el *New York Times* y *Eater*— se enorgullece de estar redescubriendo decenas de ingredientes nativos de todo el territorio nacional, incluyendo muchos que han servido para sustituir cultivos de uso ilícito y experimentar con ellos en los fogones.

“Acá está pasando un proceso diferente al que pasó por ejemplo en Francia: allá la gastronomía se desarrolló porque, después de la Segunda Guerra Mundial, estaban destruidas todas las vías de acceso y les tocó redescubrir su cocina porque solo tenían acceso a los productos locales. En Colombia han pasado dos cosas: logramos comenzar a viajar hasta sitios que antes no podíamos y, al tiempo, esos productos empezaron a poder comercializarse”, reflexionaba el año pasado el recientemente fallecido chef colombiano Alejandro Cuéllar, quien junto a once amigos cocineros para publicar un libro con recetas basadas en productos de sustitución.

Mini-mal, Salvo Patria y Abasto son algunos de los restaurantes bogotanos donde el menú incluye platos con palmitos, frutos amazónicos o pimienta que vienen de campesinos que le dijeron adiós a la coca. Varios de ellos, más otros como El Chato en Bogotá y Celele en Cartagena, también están incorporando platos a base de hoja de coca, en un esfuerzo complementario por encontrar soluciones culinarias al problema.

Para muchas comunidades campesinas establecer canales de venta directos en las ciudades constituye una manera de mantenerse económicamente.



4

Un pequeño empujón

Caminos Puentes y Cauces (CPC) es un ejemplo de asociatividad que ha permitido a los campesinos avanzar en resolver problemas en los que los gobiernos regionales y nacional no les han respondido.

CAMINOS PUE



¡EL CAMBIO ES AHORA



NTES Y CAUCES

“Nosotros no necesitamos que nos den regalos o que nos lleven de la mano para salir adelante. Lo que necesitamos es un pequeño empujón para salir de la coca”, afirma hoy un poblador de San José de Fragua, en Caquetá, que decidió dejar este cultivo considerado ilegal para dedicarse al ecoturismo.

Muchos de estos proyectos, como CPC, trabajan a partir de una priorización colectiva de cuáles deberían ser los frentes de trabajo de la comunidad.



Ese “pequeño empujón” es un tramo de carretera —en el material conocido popularmente como placa huella— construido por la propia comunidad, que ha permitido no solo sacar diferentes productos de la región como la leche y el plátano, sino también aumentar el ingreso de los turistas en la temporada de fin de año. Esta inversión de bajo costo, que responde a una necesidad específica de los pobladores, ha comenzado a despejar el camino para el desarrollo y generar nuevas oportunidades de vida.

El debate sobre las respuestas a los cultivos ilícitos ha tendido a ubicarse en dos extremos. En uno de ellos se encuentran el Estado y la demanda de que tenga una mayor presencia en los territorios. El punto de partida de este raciocinio es que la ausencia de las instituciones estatales ha facilitado el surgimiento y permanencia de la economía ilegal del narcotráfico. La expectativa es que a través de la presencia del Estado se cierren las brechas de desarrollo y se facilite el tránsito a la economía legal.

En el otro extremo, apunta a que la infraestructura — especialmente las vías de acceso — y la conexión de con los mercados son las únicas alternativas para la transformación de los municipios que tienen una alta dependencia de los ingresos derivados de los cultivos ilícitos.

La mayoría de las opciones identificadas en este documento se encuentran en el medio de estos dos extremos: entre la necesidad de una intervención del Estado y la mayor participación de las comunidades en los mercados y opciones legales. Esto

no como resultado de una estrategia perfectamente diseñada desde el nivel central, sino a partir de la identificación de problemas concretos que tuvieron respuestas específicas.

Las “pequeñas soluciones” fueron concebidas y desarrolladas desde lo local, activando cambios incrementales bajo la perspectiva de *todos ponen*: instituciones locales y regionales, Gobierno central, agencias de cooperación, comunidades, emprendedores y el sector empresarial.

Comenzar a transitar por esta vía —la de las pequeñas soluciones o empujones— no significa abandonar la agenda de las grandes transformaciones o las reformas necesarias para mejorar la calidad de vida de los miles de familias que dependen de la economía ilegal. La propuesta en este caso es preguntarnos por lo posible, por fuera de los modelos ideales y las soluciones prefabricadas.

Está claro que deben existir unas condiciones básicas para que estas soluciones emerjan, comenzando por la protección y seguridad de las comunidades. En medio de la violencia y las amenazas es muy difícil pensar en alternativas que sean sostenibles. Las historias contadas en este documento también son un reconocimiento a líderes y comunidades que en medio de contextos de alta vulnerabilidad han persistido en sus proyectos de vida.

Nuestra obligación es contribuir a la generación y expansión de las capacidades, derechos y libertades de las poblaciones que continúan en medio de la confrontación armada y la economía ilegal.

Lo mejor que podemos hacer es entender cuáles son los problemas específicos que los afectan, para identificar las maneras más efectivas de enfrentarlos. Las experiencias aquí contadas muestran que es posible generar un progreso significativo y sostenible a partir de la acumulación de pequeños pasos.

Si bien los territorios donde hay coca requieren soluciones integrales en temas muy diversos, muchas comunidades están demostrando que trabajar en una puede mejorar significativamente las oportunidades a nivel local.



Handwritten text on a wooden sign attached to a tree trunk, including the words "Calle Con..." and "2012".



**OBRA
EN LA VÍA**

Bibliografía

BIBLIOGRAFÍA PRIMARIA

BERMÚDEZ LIÉVANO, ANDRÉS. “Antiguos coccaleros se vuelven científicos para salvar sus cultivos” (Caquetá, 2018). Publicado en *Proyecto Coca de Pacifista*. <https://pacifista.tv/notas/antiguos-coccaleros-se-vuelven-cientificos-para-salvar-sus-cultivos/>

_____. “Sobrevivir a la amapola” (Nariño, 2018). Publicado en *CeroSetenta*. <https://cerosetenta.uniandes.edu.co/sobrevivir-a-la-amapola/>

_____. “El contrabando está arruinando este caso exitoso de sustitución de coca” (Putumayo, 2018). Publicado en *Proyecto Coca de Pacifista*. <https://pacifista.tv/notas/el-contrabando-esta-arruinando-este-caso-exitoso-de-sustitucion-de-coca/>

_____. “Los excoccaleros que hoy viven del bosque que antes tumbaban” (Guaviare, 2018). Publicado en *Proyecto Coca de Pacifista*. <https://pacifista.tv/notas/los-excoccaleros-que-hoy-viven-del-bosque-que-antes-tumbaban/>

_____. “El palmito: la prueba de que a la coca solo se le gana con compradores” (Putumayo, 2018). Publicado en *Proyecto Coca de Pacifista*. <https://pacifista.tv/notas/el-palmito-la-prueba-de-que-a-la-coca-solo-se-le-gana-con-compradores/>

_____. “From Coca to Cacao” (Bogotá, 2018). Publicado en *Eater Magazine*. <https://www.eater.com/2018/10/17/17963502/coffee-cocoa-farming-colombia-coca-bogota>

_____. “Gulupa: la fruta que puede ganarle a la coca y por la que nadie daba un peso” (Cauca, 2018). Publicado en *Proyecto Coca de Pacifista*. <https://pacifista.tv/notas/gulupa-la-fruta-que-puede-ganarle-a-la-coca-y-por-la-que-nadie-daba-un-peso/>

_____. “La comunidad a la que un tesoro desconocido sacó de la coca” (Guaviare, 2017). Publicado en

Proyecto Coca de Pacifista. <https://pacifista.tv/notas/la-comunidad-a-la-que-un-tesoro-desconocido-saco-de-la-coca/>

_____. “Cáceres: el pueblo que se despide de la coca gracias a las vías” (Antioquia, 2017). Publicado en *Proyecto Coca de Pacifista*. <https://pacifista.tv/notas/caceres-el-pueblo-que-se-despide-de-la-coca-gracias-a-las-vias/>

_____. “Ni coca, ni deforestación: campesinos del Caquetá quieren cuidar el ambiente” (Caquetá, 2017). Publicado en *Proyecto Coca de Pacifista*. https://www.vice.com/es_co/article/ywbxw/coca-deforestacion-campesinos-caqueta-cuidar-ambiente-proyecto-coca-pacifista

_____. “Palabras para Iván Duque de un cacaotero exitoso que superó la coca” (Bogotá, 2018). Publicado en *Proyecto Coca de Pacifista*. <https://pacifista.tv/notas/palabras-para-ivan-duque-de-un-cacaotero-exitoso-que-supero-la-coca/>

_____. “La sustitución de coca está poniendo a pensar y cocinar- a los chefs colombianos” (Bogotá, 2019). Publicado en *Proyecto Coca de Pacifista*. <https://pacifista.tv/notas/cocina-paz-coca-cultivos-sustitucion-alejandro-cuellar/>

BIBLIOGRAFÍA SECUNDARIA

ANDREWS, M., PRITCHETT, L. & WOOLCOCK, M. (2013). *Building State Capability*. Oxford: Oxford University Press.

BANERJEE, A. Y DUFLO, E. (2011). *Poor Economics: A radical rethinking of the way to fight global poverty*. New York: Public Affairs.

CONFERENCIA DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE COMERCIO Y DESARROLLO (UNCTAD) (2015). El papel de los pequeños

agricultores en la producción y el comercio sostenibles de los productos básicos. (TD/B/62/9).

- CUÉLLAR, A. *Cocina y paz: recetas de cocina con productos de desarrollo alternativo para la paz*. Bogotá: Cuéllar Editores, 2016. Disponible en: https://www.unodc.org/documents/colombia/2016/Agosto/Libro_Cocina_y_Paz_2.pdf
- DÁVALOS, L., BEJARANO, A., HALL, M., CORREA, L., CORTHALS, A. Y ESPEJO, O. (2018). “Forests and Drugs: Coca-Driven Deforestation in Tropical Biodiversity Hotspots” En *Environmental Science and Technology*, Vol. 45, Issue 4, Enero 2011, p. 1219-1227.
- DÁVALOS, L., SÁNCHEZ, K. Y ARMENTERAS D. (2016). “Deforestation and Coca Cultivation Rooted in Twentieth-Century Development Projects”. En *BioScience*, Vol. 66, Issue 11, 1 November 2016, p. 974—982.
- DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN (2016). “Documento Conpes 3857: lineamientos de política para la gestión de la red terciaria”. Bogotá: DNP.
- HIRSCHMAN, A. (1971). “Political Economics and Possibilism”. En *The Essential Hirschman*. Jeremy Adelman, editor. Princeton: Princeton University Press, 2013. p. 1-34.
- PASCALE, R., STERNIN, J. & STERNING M. (2010). *The power of positive deviance: How unlikely innovators solve the world's toughest problems*. Harvard Business Review Press.
- KARLAN, D. (2010) “Survival of the Deviant”. En *Stanford Social Innovation Review*. Disponible en: https://ssir.org/book_reviews/entry/power_positive_deviance_richard_pascale_jerry_sternin_monique_sternin
- MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO Y UNODC (2019). *Caracterización agro cultural del cultivo de amapola y de los territorios afectados-Síntesis de resultados de investigación*. Bogotá.

- NEGRET, P. J, SONTER, L., WATSON, J. , POSSINGHAM, H. , JONES, K. , SUAREZ, C. , OCHOA-QUINTERO, J.M, , MARON, M. (2019). “Emerging evidence that armed conflict and coca cultivation influence deforestation patterns”. *Biological Conservation*, 2019; 108176 DOI: 10.1016/j.biocon.2019.07.021
- RESTREPO, J.C. Y LOZANO. I (2015). “El papel de la infraestructura rural en el desarrollo agrícola en Colombia”. En *Borradores de Economía*. Bogotá: Banco de la República.
- SÁNCHEZ ROJAS, C. (2016). “El impacto de la infraestructura vial en los hogares rurales colombianos. ¿Hacia dónde van las vías?” Documento CEDE No. 2. Bogotá: Universidad de Los Andes. Disponible en: https://economia.uniandes.edu.co/components/com_book-library/ebooks/dcede2016-02.pdf
- TÉLLEZ, G. & CUBILLOS, A. (2013) *Mercadeo agropecuario*. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia.
- UNIDAD DE PLANIFICACIÓN RURAL AGROPECUARIA —UPRA. (2018). “Metodología para la identificación general de la frontera agrícola en Colombia”. Bogotá: UPRA.
- VÉLEZ, M. A. & LOBO, I. (2019). “Challenges of Organised Community Resistance in the Context of Illicit Economies and Drug War Policies: Insights from Colombia”. En *Journal of Illicit Economies and Development*, 1(1), pp. 72-79. Disponible en: <https://doi.org/10.31389/jied.15>

AUTORES

ANDRÉS BERMÚDEZ LIÉVANO. Es un periodista y escribe sobre desarrollo rural, política de drogas, justicia transicional, temas ambientales y cómo las víctimas del conflicto reconstruyen sus vidas. Es coordinador del nuevo Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), corresponsal en Colombia de *JusticeInfo* y *Diálogo Chino*, y becario Rosalynn Carter en periodismo sobre salud mental del Carter Center y en política de drogas de la Fundación Gabo y Open Society Foundations. Escribió los libros *Los debates de La Habana: una mirada desde adentro* (2018) y *La fase exploratoria del proceso de paz: una mirada desde adentro* (2019) publicados por el Instituto para las Transiciones Integrales (IFTI).

JUAN CARLOS GARZÓN VERGARA. Es investigador asociado de la Fundación Ideas para la Paz y parte de la red global de investigadores del Woodrow Wilson Center. Politólogo, especialista en teoría y resolución de conflictos armados, con una maestría en estudios latinoamericanos y actualmente cursando el programa Datos, Economía y Políticas de Desarrollo de MIT. Ha sido consultor internacional en temas seguridad y desarrollo para el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Universidad de las Naciones Unidas, la Organización de los Estados Americanos (OEA) y el Norwegian Centre for Conflict Resolution (NOREF), así como asesor regional del Instituto Igarapé (Brasil). Trabajó en la Secretaría de Asuntos Políticos de la OEA en Washington DC, coordinó la Unidad de Análisis de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA (MAPP-OEA) en Colombia y fue investigador del Observatorio de Derechos Humanos de la Vicepresidencia de la República de Colombia.



A primera vista, el problema de los cultivos ilícitos parece abrumador, difícil de resolver. El desafío es tan grande que cualquier cosa que se haga parece insuficiente. Lo sorprendente es que, en medio de los bandazos en la política de drogas y el inconstante acompañamiento del Estado, cientos de comunidades en todo el país han intentado salir de economías ilícitas como la coca y la amapola durante las últimas dos décadas.

No lo han hecho siguiendo una ruta secuencial e inflexible trazada por el gobierno central. Se trata más bien de esfuerzos colectivos que han buscado resolver problemas estructurales a partir de la experiencia propia y los conocimientos prácticos.

En este catálogo, a partir de diez experiencias reporteadas en terreno, acompañadas de datos y contexto, identificamos soluciones concretas a problemas específicos. Pretendemos con estas “pequeñas soluciones” pasar de la discusión sobre planes rígidos y basados en lecturas simplificadoras, a la conversación sobre lo posible, activando cambios incrementales en los que todos ponen.



ISBN: 978-958-8677-38-5



9 789588 667738 5